



Consejo de Seguridad

Sexagésimo noveno año

Provisional

7168^a sesión

Viernes 2 de mayo de 2014, a las 15.00 horas

Nueva York

Presidente: Sr. Oh Joon (República de Corea)

Miembros:

Argentina	Sra. Perceval
Australia	Sr. Quinlan
Chad	Sr. Cherif
Chile	Sr. Barros
China	Sr. Shen Bo
Estados Unidos de América	Sra. Power
Federación de Rusia	Sr. Pankin
Francia	Sr. Araud
Jordania	Sr. Hmoud
Lituania	Sra. Murmokaitė
Luxemburgo	Sra. Lucas
Nigeria	Sr. Laro
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	Sir Mark Lyall Grant
Rwanda	Sr. Gasana

Orden del día

Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur

La presente acta contiene la versión literal de los discursos pronunciados en español y de la interpretación de los demás discursos. El texto definitivo será reproducido en los *Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad*. Las correcciones deben referirse solamente a los discursos originales y se enviarán firmadas por un miembro de la delegación interesada e incorporadas en un ejemplar del acta, al Jefe del Servicio de Actas Literales, oficina U-506.



Se abre la sesión a las 15.05 horas.

Aprobación del orden del día

Queda aprobado el orden del día.

Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur

El Presidente (*habla en inglés*): De conformidad con el artículo 37 del reglamento provisional del Consejo, invito al representante de Sudán del Sur a participar en esta sesión.

De conformidad con el artículo 39 del reglamento provisional del Consejo, invito a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Navanethem Pillay, y al Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio, Sr. Adama Dieng, a participar en esta sesión.

El Consejo de Seguridad comenzará ahora el examen del tema que figura en el orden del día.

Tiene ahora la palabra la Sra. Pillay.

Sra. Pillay (*habla en inglés*): Sr. Presidente: Le agradezco esta oportunidad de intervenir ante el Consejo para tratar la crisis en Sudán del Sur. En la visita que hice al país esta semana, junto con el Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio, Sr. Adama Dieng, se pudo comprobar un deterioro agudo y drástico de la situación de los derechos humanos. Al parecer, la espiral letal de matanzas motivadas por la venganza que se ha desarrollado en los últimos cuatro meses y medio está alcanzando un nivel de intensidad que genera un temor real al desastre entre la población de Sudán del Sur, acompañado por la probabilidad de una hambruna generalizada que el conflicto ha generado.

Hace dos semanas, a raíz de la captura de Bentiu por el Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición, centenares de personas, muchas de ellas civiles, incluidos los que se refugian en lugares de culto y hospitales, fueron perseguidos y asesinados debido a su etnia. Después de la masacre en Bentiu, tuvo lugar un acto de represalia en Bor contra desplazados que habían buscado refugio en el complejo de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), que provocó la muerte de al menos 50 mujeres, hombres y niños. Muchos más, incluidos dos miembros del personal de mantenimiento de la paz, resultaron heridos.

A principios de esta semana, el Sr. Dieng y yo viajamos a Bor y nos reunimos con varios supervivientes, que nos describieron el ataque y expresaron el temor de

ser víctimas de nuevos ataques por motivos étnicos o porque se pudiera percibir que eran partidarios de una u otra parte en el conflicto. Afortunadamente, la enérgica intervención de los efectivos de mantenimiento de la paz de la India impidió que centenares de personas más resultaran heridas o fueran asesinadas.

La UNMISS funcionó de manera encomiable al abrir sus puertas a alrededor de 80,000 personas, y las ha protegido y les ha ofrecido refugio de la mejor manera posible. Sin embargo, diversos dirigentes de la comunidad nos comunicaron que se sienten aterrorizados por la posibilidad de nuevos ataques y desean que se los traslade del complejo de las Naciones Unidas a lugares seguros. El UNICEF informa que ambas partes han reclutado en sus fuerzas armadas a más de 9.000 niños. Las fuerzas militares han tomado 32 escuelas, y se han producido más de 20 ataques contra hospitales y centros de salud. Ambas partes también han asesinado a niños en ataques indiscriminados contra civiles.

Desde diciembre, hemos visto versiones de esa violencia étnica específica en Malakal y docenas de otras ciudades más pequeñas en todo el país, así como en la propia Juba. Los ciclos cada vez más rápidos de la venganza han alcanzado ahora tal intensidad que las matanzas de Bentiu y Bor podrían generar más actos de violencia. Algunas de esas capitales clave de los estados han cambiado de manos muchas veces desde el comienzo del conflicto, después de la lucha o después de que la otra parte se retirara, haciendo a los civiles más vulnerables a los ataques.

Elementos de todas las partes en el conflicto han pedido públicamente a sus partidarios que persigan a los que pertenecen a otros grupos étnicos. Como un triste recuerdo de los acontecimientos que llevaron al genocidio de Rwanda, después de tomar Bentiu este mes los rebeldes ocuparon una estación de radio local y exhortaron a sus partidarios a que se vengaran, hasta violando a mujeres de otras comunidades. Incluso más recientemente, de acuerdo con informes de prensa, el Gobernador de la región de los Lagos dijo en una reunión de jóvenes el pasado fin de semana:

“Lo que estamos haciendo hoy es ojo por ojo. Tú me atacas, yo también te ataco, sin perdón. Si alguien te ataca una y otra vez, y no haces lo mismo, estás creando una debilidad en ti mismo.”

Estas declaraciones de funcionarios públicos de alto nivel exacerban la violencia. El Presidente Kiir nos dijo que odiaba la venganza. Lo insté a que hiciera pública su declaración con el fin de detener la continua

violencia. Riek Machar reconoció la necesidad de una solución política, afirmando que “odia la situación en que se encuentra” y que estaría abierto a las conversaciones de paz.

Una cuestión de suma urgencia es la catástrofe humanitaria inminente. Ya comenzó la temporada de lluvias, lo que significa que ya ha transcurrido la mitad de la temporada de siembra, aumentando así la perspectiva de una hambruna generalizada. El Sr. Dieng y yo hemos instado a los dirigentes de ambas partes a que observen un alto el fuego de 30 días para que las personas puedan regresar a sus campos y sembrar tanto como fuese posible. Sorprendentemente, sus reacciones indican que esto no era una preocupación primordial.

El mes pasado dije, con respecto a la impunidad y la rendición de cuentas ante el Consejo, que la cultura de impunidad que impera en Sudán del Sur había exacerbado la violencia actual y que era fundamental establecer sin demora las capacidades del sistema judicial nacional para poder abordar la rendición de cuentas de manera eficaz. Solo con medidas claras y decisivas encaminadas a la rendición de cuentas, se puede aspirar a detener los ciclos de asesinatos por venganza y restablecer el sentimiento de un destino común en todo el país.

Durante nuestra misión, el Sr. Dieng y yo transmitimos esta inquietud al Presidente Salva Kiir y a cinco Ministros principales del Gabinete de su Gobierno. También viajamos a Nassir, donde hablamos sobre los asesinatos cometidos en Bentiu con el dirigente de la oposición, Riek Machar, ex-Vicepresidente de Sudán del Sur, ya que los ataques fueron llevados a cabo por fuerzas vinculadas al Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición, que él dirige. El Gobierno dijo que está investigando las matanzas de civiles en masa ocurridas en Juba a mediados de diciembre y, de igual modo, el Sr. Machar nos aseguró que investigaría la masacre de Bentiu, y añadió que haría el máximo para impedir que sus fuerzas atacaran a la población civil.

Celebro los compromisos de investigar, pero como he dicho esta semana a mis distintos interlocutores, estas investigaciones deben ser independientes, transparentes y coherentes con las normas internacionales, y deben realizarse con rapidez para adoptar medidas contra los presuntos responsables con el fin de tranquilizar a una población civil aterrorizada en el sentido de que la violencia étnica no seguirá intensificándose.

Lamentablemente, no estoy convencido de que esto sucederá. Me temo que los dirigentes de Sudán del

Sur estén librando una lucha por el poder de carácter puramente personal, con poca o ninguna preocupación por el terrible sufrimiento que ello inflige a su pueblo. El Sr. Dieng y yo les comunicamos que, inevitablemente, serán objeto de investigaciones internacionales sobre el alcance de su conocimiento acerca de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por los subordinados bajo su autoridad, y su incapacidad para adoptar medidas razonables destinadas a prevenir este tipo de delitos.

Con respecto a las negociaciones de paz, la presión internacional ha tenido cierto efecto en el estancamiento de las conversaciones entre el Presidente Kiir y el Sr. Machar. La semana pasada, en lo que se interpretó como un gesto de reconciliación, el Gobierno liberó a cuatro prisioneros a quienes había acusado de fraguar un golpe de Estado. El lunes, se reanudaron en Addis Abeba las conversaciones de paz entre las partes beligerantes, bajo los auspicios del bloque de África Oriental, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD). Además, hoy, entiendo que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Sr. John Kerry, ha anunciado que los dos dirigentes han aceptado reunirse.

Pude reunirme en Addis Abeba con el jefe del equipo de mediación de la IGAD, el Comisionado de la Unión Africana para Asuntos Políticos y el Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Etiopía. La IGAD está ejerciendo presión para que se lleve a cabo un despliegue rápido de la fuerza de protección y disuasión propuesta, que proporcionará protección a los equipos de vigilancia y verificación encargados de vigilar el cumplimiento del acuerdo de cesación de las hostilidades firmado en enero. En opinión del jefe de la IGAD, según sus palabras, se trata de “un cambio de juego” para reducir la violencia actual. A pesar de las violaciones graves de la cesación de las hostilidades por ambas partes, los equipos de vigilancia y verificación no han investigado las presuntas violaciones.

Como me recordó el Embajador durante nuestra reunión, ha muerto un número mayor de personas después de que se firmó el acuerdo de cesación de las hostilidades que antes. Pido al Consejo de Seguridad que apoye la iniciativa de la IGAD. El despliegue de la fuerza de protección ayudará a salvar vidas a corto plazo. La fuerza debe desplegarse únicamente si tiene un mandato claro, que respalda la solución política del conflicto.

También me reuní con cuatro miembros de la comisión de investigación de la Unión Africana. Acaban de regresar de su primera visita a Sudán del Sur, donde

se reunieron con los desplazados y las víctimas en cumplimiento de su mandato de investigar la rendición de cuentas, la justicia y la reconciliación. La Comisión necesitará apoyo considerable para poder cumplir su mandato con eficacia, incluida una secretaría con la plantilla completa dotada de los conocimientos especializados necesarios. Mi oficina está dispuesta a apoyar a la Comisión siempre que lo solicite.

La IGAD y los dirigentes regionales comparten la indignación del resto del mundo. Consideran que el conflicto es un enfrentamiento entre dos dirigentes por el poder político y el control de los ingresos provenientes del petróleo.

Con respecto a las medidas y las recomendaciones internacionales, en diciembre el Consejo acordó que el número de efectivos de mantenimiento de la paz de la UNMISS debía aumentar de 7.700 a 13.200. Sin embargo, los países contribuyentes aún no han aportado unas dos terceras partes de los efectivos adicionales. Se necesitan desesperadamente. Confío en que los miembros del Consejo hagan todo lo posible para garantizar que la UNMISS pueda contar con una dotación completa de efectivos de mantenimiento de la paz, así como con recursos presupuestarios suficientes. El país más joven del mundo tiene una larga historia de sufrimiento. Su pueblo espera que el Consejo ejerza su autoridad para garantizar una pronta solución política para este horrible conflicto.

El Presidente (*habla en inglés*): Doy las gracias a la Sra. Pillay por su exposición informativa.

Tiene ahora la palabra el Sr. Dieng.

Sr. Dieng (*habla en inglés*): En primer lugar, deseo dar las gracias al Presidente del Consejo de Seguridad, el Embajador Oh Joon, así como a los demás miembros del Consejo por haberme invitado a dirigirme a esta sesión.

El Secretario General, Excmo. Sr. Ban Ki-moon, nos pidió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Sra. Navi Pillay, y a mí que viajáramos a Sudán del Sur esta semana para dar seguimiento a los recientes ataques brutales contra la población civil, que tuvieron lugar la ciudad septentrional de Bentiu, incluso en lugares de culto y hospitales, y dentro de una base de las Naciones Unidas, donde los desplazados internos se habían refugiado en Bor. Estamos muy agradecidos a la Representante Especial del Secretario General, Sra. Hilde Johnson, y al personal de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) por el apoyo que proporcionaron durante nuestra muy breve pero intensa

misión. Limitaré mis observaciones a los elementos que guardan relación con mi mandato.

La violencia que estalló el 15 de diciembre de 2013, tras una lucha de poder dentro del gobernante Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés entre el ex-Vicepresidente Riek Machar y el Presidente Salva Kiir, ha degenerado rápidamente en violencia étnica. Los últimos ataques brutales en Bentiu, en el estado Unidad, y Bor, en el estado de Jonglei, parecen haber cambiado la trayectoria del conflicto y, de no ponerse fin de inmediato a esos ataques, podrían sumir al país en una grave espiral de violencia que podría quedar fuera de control. En esta situación, vemos elementos que podrían categorizarse como factores de riesgo de genocidio y otros crímenes atroces.

En Bentiu, más de 200 civiles del grupo étnico dinka fueron masacrados y más de 400 otros resultaron heridos, supuestamente por las fuerzas de oposición aliadas al ex-Vicepresidente Riek Machar. Según informes de las Naciones Unidas, los atacantes separaron a los civiles de origen étnico dinka de los de origen étnico nuer y luego ejecutaron a los dinka y a otros que supuestamente respaldaban al Gobierno.

En Bor, elementos armados supuestamente afiliados al Gobierno entraron por la fuerza al campamento de la UNMISS, en el que se habían refugiado desplazados internos. Mataron a más de 50 civiles, en su mayoría de origen étnico nuer, e hirieron a alrededor de otros 100. Se suponía que ese ataque fue llevado a cabo en represalia por la toma de la aldea de Bentiu por las fuerzas de oposición. En la reunión que sostuvimos con los desplazados internos en Bor, estos expresaron temor de que los ataques podrían repetirse en cualquier momento y pidieron a las Naciones Unidas que los reubicaran en algún otro lugar más seguro, preferiblemente en Akobo. Dijeron que conocían a algunos de los perpetradores y que no se sentían seguros en Bor, donde corrían el riesgo de ser blanco de los ataques simplemente por ser nuer. El Comandante de la UNMISS en Bor corroboró las declaraciones de los desplazados internos y nos informó de que el último ataque estuvo bien organizado y que entre los atacantes había personas uniformadas del ejército de Sudán del Sur, del Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA).

Otro motivo de grave preocupación ha sido la denuncia del uso de la radio en algunas zonas para divulgar mensajes que constituyen incitación a la violencia contra todos aquellos que se cree que apoyen al Gobierno. Se dijo que, en Bentiu, los combatientes aliados

al Sr. Riek Machar incitaron a la población civil a que atacara a los dinka, alentando incluso a sus seguidores a que cometieran actos de violencia sexual contra las mujeres. Eso es totalmente inaceptable.

En las consultas que celebramos con altos funcionarios del Gobierno en Juba y con el Sr. Machar, observamos con preocupación que ambas partes o bien negaron los ataques contra los civiles o bien los justificaron alegando que se llevaron a cabo en legítima defensa contra un grupo vengativo. Si queremos garantizar la protección de la población civil en el país, el Estado tiene que reconocer que tiene la responsabilidad primordial de proteger a todos los habitantes de Sudán del Sur, independientemente de su nacionalidad, origen étnico o afiliación política, y priorizar esa responsabilidad. Culpar a un grupo o a otro es simplemente irresponsable y peligroso.

La UNMISS hace todo lo posible en circunstancias sumamente difíciles y es digna de elogio. Todos los dirigentes en Sudán del Sur deben asumir una mayor responsabilidad para garantizar que los que están bajo su autoridad no cometan violaciones graves del derecho internacional humanitario ni del derecho relativo a los derechos humanos. Deberían enviar firmes mensajes para llamar a la unidad y el respeto de todos los habitantes de Sudán del Sur y adoptar medidas inmediatas para poner fin a la violencia. Me complace que, en nuestras reuniones, celebradas esta semana, tanto el Presidente Salva Kiir como el Sr. Riek Machar afirmaran su voluntad de hacerlo. Espero que adopten ahora medidas concretas para que cumplan con sus compromisos.

Los informes de la homogeneización de las fuerzas de seguridad por ambas partes son preocupantes puesto que consideramos que se corre el riesgo de que se cometan crímenes atroces. La percepción de que los que respaldan a Riek Machar son predominantemente del grupo étnico nuer y los que respaldan al Presidente Kiir son predominantemente dinka ha aumentado el riesgo de que las personas sean atacadas sistemáticamente por motivos étnicos. Esa polarización se exagera aún más por las denuncias de exclusión y discriminación por el origen étnico. Por ejemplo, en Bor los desplazados internos nos informaron de que funcionarios del Gobierno les han negado el acceso a la atención médica por ser nuer.

La cultura de impunidad en Sudán del Sur ha incidido considerablemente en la actual crisis. A medida que buscamos la paz en esa joven nación, tenemos que garantizar también que los responsables de los crímenes cometidos allí sean enjuiciados. No habrá paz sin

justicia. La actual cultura de impunidad únicamente socavarán nuestros esfuerzos. Lo hemos aprendido a la mala de los acontecimientos que han ocurrido en otros lugares, como el genocidio de los tutsis que se produjo hace 20 años en Rwanda. A los supervivientes del genocidio, le debemos la promesa de que adoptaremos todas las medidas posibles para proteger a las poblaciones de otra Rwanda. No hay justificación para cruzarnos de brazo.

En ese sentido, encomio los esfuerzos de mediación de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y el papel de la comisión de investigación sobre Sudán del Sur de la Unión Africana, que tiene por objeto poner fin a la violencia y hacer justicia a las víctimas. Tanto el Presidente Kiir como Riek Machar nos informaron de que estaban investigando todas las violaciones graves cometidas por sus respectivas fuerzas y de que los que fueran hallados responsables serían enjuiciados. Debemos hacer que cumplan ese compromiso.

En la reunión que celebramos con los miembros de la comisión de investigación sobre Sudán del Sur de la Unión Africana, reiteré la esperanza de la comunidad internacional en que la labor de la comisión sea independiente, exhaustiva y creíble, e insistí en que deberían garantizar que la comisión no solo procurara adoptar medidas de reconciliación y recuperación nacionales, sino también hiciera hincapié en las medidas de rendición de cuentas. Los miembros de la comisión de investigación de la Unión Africana pidieron asistencia técnica de las Naciones Unidas, en particular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Debemos hacer todo lo posible por respaldar su labor. Me alentó observar, a partir de las conversaciones que sostuve con la IGAD, que los enviados de mediación de la IGAD consideran que la rendición de cuentas debería ser parte integrante de todo acuerdo al que se llegue para poner fin al enfrentamiento.

Para concluir, debemos seguir siguiendo de cerca la situación en Sudán del Sur, adoptar todas las medidas que resulten más convenientes para proteger a la población de un mayor sufrimiento e impedir que la situación se vaya fuera de control. El riesgo de que suceda es sumamente elevado, basado en los factores de riesgo que he mencionado hoy. La UNMISS ha salvado vidas al abrir sus puertas para proteger a la población en Bentiu, Bor, Malakal y otros lugares. Sin embargo, la Misión se encuentra en una situación muy tensa y los países que aportan contingentes deberían acelerar el despliegue de más efectivos como parte del reforzamiento de la fuerza de la UNMISS para aumentar su capacidad de proteger a la población.

Si las partes no demuestran claramente su voluntad e intención de poner fin a la violencia y a los ataques contra los civiles, incluida la incitación a cometer actos de violencia, considero que el Consejo debería entonces examinar la posibilidad de adoptar medidas adicionales contra las partes para impedir que se siga deteriorando la situación. Todos debemos respaldar los esfuerzos dirigidos a enjuiciar a los responsables de violaciones graves. Debemos, principalmente las autoridades nacionales, actuar basados en los resultados y las recomendaciones del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se publicará pronto, y de otros informes sobre los derechos humanos.

Por último, los asociados para el desarrollo deben abordar la cuestión de la deficiencia en la gobernanza. Además de aparentemente hacer caso omiso de las condiciones de la población, las autoridades hacen la vista gorda ante la corrupción. Esa corrupción ha generado también un motivo claro para que otros se alcen en armas para poder tener también acceso a los recursos nacionales para provecho personal. La violencia hoy en Sudán del Sur no está motivada por el deseo de cambiar al país, sino más bien por objetivos de interés propio relativos al acceso a la riqueza petrolera y los recursos para el desarrollo. La comunidad internacional no debe ser cómplice en ese programa. Por lo tanto, la prevención de nueva violencia requiere una respuesta internacional coordinada que abarque una nueva postura por parte de los asociados para el desarrollo. Cualquier resolución debe tener ello en cuenta.

Debemos asumir nuestra responsabilidad colectiva de proteger a la población de Sudán del Sur del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad y su incitación a cometerlos. No se debe utilizar el origen étnico como justificación para incitar a la violencia, demonizar, excluir o atacar a cualquier comunidad o sector de la población en Sudán del Sur.

El Presidente (*habla en inglés*): Doy las gracias al Sr. Dieng por su exposición informativa.

Tienen ahora la palabra los miembros del Consejo.

Sra. Power (Estados Unidos de América) (*habla en inglés*): Quisiera dar las gracias a la Alta Comisionada, Sra. Pillay, y al Asesor Especial, Sr. Dieng, por sus inquietantes exposiciones informativas de hoy.

Mi Gobierno suscribe la condena que ellos y otros han hecho de los ataques execrables y deliberados contra la población civil en Sudán del Sur. En lugar de poner

fin a las hostilidades, tal como se habían comprometido a hacer hace tres meses, las partes han decidido intensificar los enfrentamientos y hacerlo de manera que han pisoteado las normas humanitarias. En abril, las fuerzas leales al ex Vicepresidente Machar atacaron a los civiles en Bentiu, persiguiéndolos hasta un hospital, una iglesia y una mezquita, mataron a al menos 200 personas y probablemente muchas, muchas más, y dejaron a los fallecidos tirados en la calle. En Bor, con el telón de fondo de una retórica hostil contra las Naciones Unidas por parte de altos funcionarios del Gobierno de Sudán del Sur, varios centenares de jóvenes armados entraron por la fuerza en el campamento de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y dispararon contra civiles desplazados en un ataque perpetrado por motivos étnicos que fue tan cobarde como despiadado. El número de víctimas mortales de ese enfrentamiento superó las 110, entre ellas 48 civiles que huían para salvar la vida.

También se ha registrado violencia contra la población civil en Juba, Malakal y Wau, acompañada de abuso sexual y del reclutamiento de niños soldados. Asimismo, nos hemos enterado de la abominable emisión de nuevos programas radiofónicos que fomentan el odio étnico e incitan a una mayor violencia. Y, como todos sabemos, el aumento de los enfrentamientos lleva a un aumento de la población civil desplazada que necesita un lugar seguro y una fuente de sustento, un aumento de las vidas trastornadas, de las escuelas cerradas y de la carga, que se vuelve aún más pesada, asumida por los organismos de socorro de las Naciones Unidas y los donantes, los cuales se ven cada vez más desbordados.

Recordamos el júbilo de hace menos de tres años cuando Sudán del Sur logró la independencia. Entre el ruido de las bocinas y las enfáticas manifestaciones de orgullo nacional, los ciudadanos eufóricos izaron su nueva bandera y los diplomáticos recién nombrados ocuparon su lugar en la Asamblea General. Los amigos de Sudán del Sur, familiarizados con los muchos sacrificios que se habían hecho antes de que llegara ese día, lo celebraron. Los exiliados regresaron a casa para ayudar a poner en pie a la nueva nación. La comunidad internacional prestó un apoyo amplio, que entre otras cosas consistió en una misión de las Naciones Unidas que se comprometió a trabajar en colaboración con el Gobierno y el pueblo sudaneses para ayudarlos a crear este nuevo Estado. La sociedad civil también puso su grano de arena, y la gran mayoría de los ciudadanos de Sudán del Sur se volcó a conciencia para robustecer la economía y fomentar unas comunidades más fuertes.

Sin embargo, un país necesita un liderazgo efectivo y en Sudán del Sur, después de un inicio prometedor, los dirigentes en el poder y en la oposición han optado por poner sus rivalidades y celos personales por encima de los intereses del país. Quienes están atizando este conflicto —muchos de los cuales son exactamente las mismas personas que desempeñaron una función decisiva para lograr la independencia de Sudán del Sur— han elegido la coerción por encima de la cooperación, y la violencia por encima del proceso democrático. El resultado es catastrófico.

Es inadmisibles que los dirigentes de Sudán del Sur no hayan sido capaces de adoptar las medidas necesarias para restablecer la paz y poner fin al sufrimiento innecesario de su pueblo. El hecho de que sigan sin ser capaces de hacerlo podría muy bien llevar al país a un ciclo más pronunciado de matanzas étnicas a modo de represalia, a una guerra civil cada vez más acusada y a un desastre humanitario incluso más devastador que se deteriorará con el inicio de la estación de las lluvias y con las perspectivas de una hambruna inminente. Para evitarlo, pedimos a todas las partes que hagan lo más acertado para el pueblo de Sudán del Sur, el cual tiene su confianza depositada en ellas, y la comunidad internacional, que las apoyó durante décadas y se comprometió a remangarse para ayudar a construir su nuevo país.

Instamos a los dirigentes de Sudán del Sur a que suspendan toda acción militar, según prometieron hacer cuando firmaron el acuerdo para el cese de las hostilidades. Además deben permitir a la UNMISS que cumpla con su mandato, sin acoso, amenazas ni miedo a ataques, para proteger al pueblo de Sudán del Sur. Deben respetar los derechos y la dignidad de cada ciudadano, independientemente de su origen étnico, permitir la entrega irrestricta de provisiones humanitarias, detener la retórica beligerante y la incitación a la violencia y condenar públicamente todo ataque contra la población civil. Deben regresar de buena fe al proceso de paz moderado por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, cooperar con los investigadores y observadores de los derechos humanos de las Naciones Unidas y la Unión Africana y resolver sus diferencias por medios pacíficos. No pueden simplemente prometer que harán todo esto, tal como han hecho antes. Deben decirlo sinceramente, y hacerlo, y hacerlo ahora.

La responsabilidad primordial de poner fin a la violencia en Sudán del Sur es de los dirigentes del país, pero hay medidas útiles que el Consejo y la comunidad internacional pueden adoptar. El 3 de abril, el Presidente de los Estados Unidos dictó una orden ejecutiva por

la que se imponían sanciones selectivas contra aquellas personas que se ha determinado que han contribuido a las atrocidades o han adoptado medidas que perjudican la paz y la estabilidad en Sudán del Sur. El Consejo debe determinar urgentemente si imponer sanciones selectivas paralelas del Consejo de Seguridad para tratar de disuadir ataques abominables contra la población civil como los que vimos el mes pasado en Bor y Bentiu. Por supuesto, tampoco abandonaremos jamás la diplomacia.

Hoy, el Secretario de Estado, Sr. John Kerry, estuvo en Juba, donde ha reiterado al Presidente Kiir tanto el apoyo de la comunidad internacional al pueblo de Sudán del Sur como nuestra negativa a respaldar a los dirigentes del país si continúan por la vía de la violencia y la destrucción en lugar de la vía de la negociación y la cooperación. El Presidente Kiir ha dicho que aplicará de inmediato el acuerdo de cese de las hostilidades y se reunirá directamente con el ex-Vicepresidente Machar. Hemos oído muchas promesas de los dirigentes de Sudán del Sur, pero no se les ha dado seguimiento. Esperamos, por el bien del pueblo de Sudán del Sur, que esta vez sea diferente. Instamos al Presidente Kiir y a Riek Machar a que acuerden rápidamente una fecha para las conversaciones cara a cara.

La reunión es una reunión de emergencia y ambas partes deben tratarla como tal. Todos los días, la polarización étnica y la violencia se agravan. Insisto en que los Estados Unidos apoyan firmemente la labor crucial de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, así como de los organismos de socorro, que hacen todo lo que pueden en condiciones difíciles para atender las necesidades de hombres, mujeres y niños en una situación precaria. Quisiera recordar al Gobierno de Sudán del Sur que tiene la obligación para con la comunidad internacional de impedir ataques contra las Naciones Unidas y contra sus organismos. Eso significa, reiteramos, que el propio Gobierno debe dejar de intimidar, acosar y calumniar a la Misión de las Naciones Unidas y a su personal.

Los próximos días, mi Gobierno se sumará a la distribución de un proyecto de resolución en el que se revisará el mandato de la UNMISS de manera que se centre más en la protección de la población civil, la observación y la investigación de los derechos humanos y la entrega de alimentos y otras provisiones de emergencia. Habida cuenta de la función fundamental que desempeña la UNMISS, el Consejo debe ocuparse de ese proyecto de resolución con la urgencia que exige esta crisis.

Quienes elijan el camino de la violencia y el odio han recibido la correspondiente advertencia. Nadie tiene licencia para atacar al personal de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, a los observadores internacionales o a los no combatientes civiles de ninguna nacionalidad o etnia. Nadie tiene derecho a atacar a otros por motivos étnicos, a incitar a la violencia o a traspasar el muro protector de una base de las Naciones Unidas. Quienes hagan caso omiso de esta advertencia no deben tener la menor duda de que la comunidad internacional hará todo lo que esté en su poder para que esas personas respondan de sus actos. La cultura de impunidad debe terminar.

Quisiera decir a mis colegas que es indispensable que nos mantengamos decididos y unidos para presionar al Gobierno y a las principales figuras de la oposición de Sudán del Sur para que cambien ese rumbo peligroso y actúen genuina y efectivamente para lograr la paz. El mes pasado, el mundo se detuvo por un momento para recordar el genocidio que tuvo lugar en Rwanda hace 20 años. El Presidente Kiir asistió a esa ceremonia para presentar sus respetos. Ahora el Presidente Kiir, el ex-Vicepresidente Machar y otros dirigentes rebeldes tienen el deber para consigo y para con sus compatriotas de alejar al país del borde del abismo. No es demasiado tarde, pero la oportunidad va desapareciendo.

Sr. Quinlan (Australia) (*habla en inglés*): Sr. Presidente: Gracias por haber convocado esta importante sesión pública en este Salón. También quisiera dar las gracias a la Alta Comisionada, Sra. Pillay, y al Asesor Especial, Sr. Dieng, por sus exposiciones informativas tan francas e inquietantes. Su visita fue esencial y el propio Consejo debe velar por que la información inmediata que nos acaban de presentar sea decisiva.

Todos hemos quedado horrorizados por los hechos atroces ocurridos en Bentiu y Bor, donde hace apenas unas semanas centenares de hombres, mujeres y niños fueron víctimas de matanzas por motivos étnicos cuando buscaban refugio en un hospital, una mezquita, una iglesia y la base de las Naciones Unidas, todos ellos lugares que deberían ser inviolables, ya que están protegidos por el derecho internacional. El uso de programas radiofónicos para incitar a las matanzas por motivos étnicos y a la violencia sexual contra mujeres y niñas es escalofriante y nos recuerda de manera aterradora las atrocidades masivas ocurridas en otros lugares. La imagen de niños soldados asesinados, sus cadáveres tirados en la calle todavía aferrados a una AK-47, es desgarradora.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Australia, Sr. Bishop, junto con tantos otros dirigentes mundiales,

ha condenado categóricamente esta violencia, cuya escala e intensidad representan un nuevo capítulo siniestro de un conflicto brutal que ya se ha cobrado la vida de muchos miles de civiles y ha desplazado a más de un millón de personas. Hasta que se rompa este ciclo, se producirán más atrocidades, inevitablemente, y se perderán más vidas, inevitablemente. Nuestro mensaje a todas las partes en este conflicto es simple. No puede haber una solución militar.

El Presidente Salva Kiir y el Sr. Riek Machar deben asumir su responsabilidad de proteger a la población civil, independientemente de su origen étnico o afiliación política. Deben comprometerse y comprometer a sus fuerzas de inmediato con un alto el fuego y participar sinceramente en el proceso de paz encabezado por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD). Encomiamos a la IGAD y a Etiopía por su liderazgo y por el valioso papel que siguen desempeñando como asociados en favor de la paz y la estabilidad en la región.

Acogemos con beneplácito la publicación inminente del informe de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) sobre violaciones de los derechos humanos. Ninguna de las partes en el conflicto debe creer ilusoriamente que habrá algo menos que una plena rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos, que esperamos se detallen en el informe. De conformidad con el principio de la responsabilidad del mando, los dirigentes deberán rendir cuentas por las acciones cometidas por sus subordinados. No puede persistir la impunidad, ni tampoco puede considerarse que habrá una amnistía generalizada. El legado de la falta de rendición de cuentas es uno de los elementos que perpetúa el conflicto.

Acogemos con agrado la labor de la comisión de investigación de la Unión Africana y expresamos nuestro constante apoyo al Presidente Obasanjo y a su equipo. El Consejo seguirá considerando la posibilidad de remitir la situación en Sudán del Sur a la Corte Penal Internacional una vez que tengamos la oportunidad de considerar las recomendaciones de la Comisión.

Como Consejo, nuestra obligación consiste ahora en ayudar a que el país se aparte del borde del abismo, ya que nos enfrentamos a violaciones de derechos humanos graves y persistentes, a dificultades extremas en materia de protección y a un agravamiento de la crisis humanitaria. Evidentemente, la situación invoca el principio de la responsabilidad de proteger. Encomiamos la adopción rápida de medidas por parte de la UNMISS para establecer emplazamientos de protección en las etapas

iniciales del conflicto, medida que salvó innumerables vidas. Para eso existen las Naciones Unidas. El compromiso de las Naciones Unidas y del Representante Especial del Secretario General, Sr. Johnson, de proteger a los civiles es una declaración de su preocupación y de su determinación de ayudar a la población de Sudán del Sur. El Gobierno de Sudán del Sur debe ahora declarar de manera inequívoca su apoyo a la UNMISS y ofrecerle una cooperación plena y responsable.

Debemos proceder con urgencia para modificar el mandato de la UNMISS a fin de otorgar a la Misión prioridades más claras y más precisas, así como de lograr que su objetivo fundamental sea la protección de los civiles. Mediante el nuevo mandato se debería reafirmar la neutralidad y la imparcialidad de la UNMISS y congelar la mayoría de las tareas de consolidación del Estado hasta que se detengan los combates y se establezca un camino hacia una paz genuina. Tenemos que trabajar con la alianza para el mantenimiento de la paz —el Consejo, la Secretaría y los países que aportan contingentes y fuerzas de policía— para desplegar a los efectivos de mantenimiento de la paz necesarios con mayor rapidez, y debemos otorgarles el mandato, los instrumentos y la movilidad que necesitan para proteger a los civiles de forma adecuada.

La próxima medida esencial será ampliar las actividades de seguridad mucho más allá de los campamentos de desplazados internos para proteger a un mayor número de civiles que corren un gran peligro. Respaldamos el despliegue propuesto de una fuerza de protección para que los observadores de la IGAD desempeñen su tarea. Ante el inminente espectro de la hambruna, no debemos escatimar esfuerzos para facilitar el acceso humanitario de manera que la asistencia vital pueda llegar a las personas que más la necesitan. Resulta inaceptable toda medida por la que se deniegue, demore u obstaculice ese acceso. Desde que comenzó la crisis, mi propio país ha proporcionado hasta ahora más de 10 millones de dólares destinados a la asistencia de emergencia. Alentamos a los Estados Miembros a que contribuyan con generosidad a los llamamientos humanitarios en favor de Sudán del Sur.

Como lo demuestra la lucha en los estados de Alto Nilo y Unidad, ricos en petróleo, la competencia por los recursos naturales y sus ingresos es otro elemento importante que impulsa ese conflicto. La proliferación y la fácil disponibilidad de armas pequeñas, armas ligeras y municiones atizan aún más el combate.

El Consejo cuenta con instrumentos, además del mantenimiento de la paz, que pueden aplicarse para mitigar la intensidad del conflicto y aportar un cierto grado

de protección a la población del Sudán del Sur. Consideramos que ha llegado el momento de que el Consejo considere la posibilidad de aplicar un embargo de armas. Australia también respalda la aplicación de sanciones financieras y de viajes contra los instigadores de la violencia y los responsables de violaciones de los derechos humanos en Sudán del Sur. Quienes obstaculicen el camino hacia la paz deben pagar un precio por sus acciones. Las sanciones selectivas constituyen un factor que permite ejercer presión a fin de poner límites a la conducta de los protagonistas y hacer que reanuden el diálogo.

Para concluir, mientras los dirigentes de Sudán del Sur participan en una lucha de poder amarga y sangrienta para lograr sus propios intereses mezquinos, el sufrimiento de la población de Sudán del Sur se torna cada vez más agudo. Esa es una traición imperdonable a la nación más joven del mundo. Debemos escuchar el nítido llamamiento a la acción que se ha formulado hoy y acelerar la respuesta del Consejo.

Sr. Laro (Nigeria) (*habla en inglés*): Yo también doy las gracias a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Pillay, y al Secretario General Adjunto y Asesor Especial del Secretario General para la Prevención del Genocidio, Sr. Dieng, por sus exposiciones informativas.

Nigeria siguió con sumo interés la visita de la Alta Comisionada, Sra. Pillay, y del Asesor Especial, Sr. Dieng, a Sudán del Sur. Acogemos con beneplácito el contacto establecido por las Naciones Unidas con el Gobierno de Sudán del Sur y con la oposición. Lo que comenzó como una controversia política entre partidos en diciembre pasado, que se podría y, sin duda, se debería haber resuelto mediante el diálogo, se ha degenerado a tal punto que el propio futuro de Sudán del Sur se ve ahora muy amenazado.

Cuatro meses después de que se inició el conflicto, observamos acontecimientos que tienen todos los rasgos distintivos de crímenes que constituyen atrocidades en masa. Nigeria condena con firmeza esos crímenes. La Alta Comisionada, Sra. Pillay, ha descrito atinadamente la situación en Sudán del Sur como una

“mezcla mortífera de recriminación, incitación al odio y asesinatos como represalias, que se ha desarrollado de manera implacable en los últimos cuatro meses y medio y ahora llega a un punto de ebullición”.

La situación resulta peligrosamente similar a la que precedió el genocidio contra los tutsis en Rwanda,

que ocurrió hace 20 años. El mundo ha dicho colectivamente “Nunca jamás” al genocidio. Ha llegado el momento de que nos mantengamos firmes con respecto a esa promesa solemne.

Como órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, consideramos que es necesario que el Consejo adopte medidas disuasorias enérgicas para poner fin a la matanza de civiles inocentes por motivos de origen étnico, religión o cualquier otra consideración. Instamos a que se detenga y se enjuicie a los perpetradores e instigadores de las matanzas en masa cometidas en Bentiu y Bor a fin de desalentar la impunidad.

En otro sentido, celebramos que el Gobierno y la oposición esta semana hayan reanudado las conversaciones de paz y encomiamos el papel de mediación desempeñado por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) al respecto. Reiteramos la posición de Nigeria de que no puede haber una solución militar para el conflicto. Exhortamos a ambas partes en el conflicto a que establezcan el diálogo como único camino hacia la paz, la seguridad y la estabilidad sostenibles en Sudán del Sur.

Habida cuenta de los miles de muertos y millones de desplazados, el final del conflicto en Sudán del Sur es una cuestión de suma urgencia. Los millones de desplazados de Sudán del Sur no pueden esperar mientras los políticos vacilan; basta de derramamiento de sangre, basta de penurias. Este es el momento para la paz, y tanto el Consejo como la comunidad internacional deben seguir adoptando todas las medidas necesarias para respaldar a Sudán del Sur en ese sentido.

Sr. Shen Bo (China) (*habla en chino*): Yo también quisiera dar las gracias a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Pillay, y al Asesor Especial del Secretario General para la Prevención del Genocidio, Sr. Dieng, por sus exposiciones informativas.

El sangriento conflicto desencadenado por la lucha política en Sudán del Sur ha durado ya casi cinco meses y ha causado un número ingente de víctimas civiles, así como un abrupto aumento del número de desplazados. La situación humanitaria y de seguridad es grave. A China le preocupa profundamente la situación. Instamos a ambas partes en el conflicto en Sudán del Sur a que logren un alto el fuego y pongan fin a la violencia de inmediato para que apliquen con eficacia el acuerdo de cesación de las hostilidades y resuelvan sus divergencias mediante el diálogo.

China apoya los esfuerzos de mediación política encabezados por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) e insta a ambas partes en el conflicto en Sudán del Sur a que cooperen con la IGAD en sus esfuerzos de mediación y resuelvan sus diferencias en el marco de las negociaciones. Acogemos con satisfacción la reciente reanudación de las conversaciones entre las dos partes con los auspicios de la IGAD y exhortamos a la comunidad internacional a que coordine sus esfuerzos con las iniciativas de mediación dirigidas por la IGAD, apoye el despliegue diligente del equipo de vigilancia del alto el fuego de la IGAD y ejerza su influencia constructiva a través de sus distintas vías para promover las conversaciones políticas.

China condena enérgicamente los violentos atentados cometidos contra civiles, el complejo de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y efectivos de mantenimiento de la paz en Sudán del Sur. China insta a las partes en conflicto a garantizar la seguridad y la protección de los civiles, incluidos los extranjeros y el personal de mantenimiento de la paz, así como a investigar el incidente. Acogemos con beneplácito el envío de la comisión de investigación de la Unión Africana para realizar investigaciones *in situ*.

China sigue con suma atención la situación humanitaria en Sudán del Sur y coopera plenamente con la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y el Gobierno de ese país a fin de iniciar lo antes posible la construcción, en Juba, de un campamento temporal para los desplazados internos. Instamos a la comunidad internacional a intensificar su asistencia a Sudán del Sur y a cumplir su compromiso de ayudar al pueblo del Sudán a sobrellevar la crisis.

Desde el estallido de la crisis, China ha trabajado arduamente y ha contribuido, de manera constructiva y por diversos medios, a promover los esfuerzos de paz y las conversaciones. El representante especial del Gobierno de China para los asuntos africanos ha mediado en varias ocasiones entre las partes en conflicto y los países de la región. China ha decidido ofrecer apoyo financiero a los mecanismos de la IGAD. Seguiremos prestando asistencia humanitaria a Sudán del Sur de acuerdo con nuestras posibilidades.

Sr. Cherif (Chad) (*habla en francés*): Para comenzar, deseo agradecer a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Navanethem Pillay, y al Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio, Sr. Adama Dieng, sus exposiciones informativas.

También agradezco al Secretario General su iniciativa de enviar una misión de alto nivel a Sudán del Sur para que el Consejo pueda tener una idea más clara respecto de los ataques más recientes contra civiles ocurridos en ese país.

Una vez más, el Chad expresa su preocupación ante la violencia generalizada en Bentiu y Bor, que ha dejado un saldo de centenares de muertos y heridos, entre ellos mujeres y niños. Condenamos enérgicamente los ataques sistemáticos contra la población civil por motivos étnicos y el uso de programas de radio para incitar al odio y a la violencia sexual, por no hablar de la persecución en lugares que deberían ser espacios protegidos, como las mezquitas, las iglesias y los hospitales.

Las dos partes buscan una solución militar sobre el terreno y no una solución negociada, cuyas perspectivas parecen cada vez más débiles, a pesar de los esfuerzos de mediación que se han desplegado para reanudar las negociaciones, sobre todo con los auspicios de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo. En este sentido, hacemos un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que ejerza presión sobre las partes de modo que pongan fin de inmediato a la violencia contra los civiles y los lugares protegidos por la Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), así como para que participen en un proceso de paz inclusivo. Reiteramos nuestro apoyo absoluto a las fuerzas de la UNMISS para el mantenimiento de la paz que, en condiciones muy difíciles, cumplen su deber de proteger a los civiles en Sudán del Sur.

Acogemos con beneplácito la decisión de los países vecinos y de los países de la región en general de enviar efectivos para contribuir a la protección de los civiles, que es una prioridad del mandato de la UNMISS. Nos complace la liberación de cuatro presos políticos y esperamos que ello tenga un efecto positivo en las conversaciones de paz. Condenamos todos los ataques contra los civiles y las instalaciones de las Naciones Unidas, y exhortamos a todas las partes interesadas a poner fin de inmediato a los actos de intimidación y hostigamiento contra la UNMISS, de manera que la Misión pueda cumplir plenamente su mandato. Acogemos con beneplácito la evaluación que hizo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre los últimos acontecimientos y esperamos con gran interés su informe. Albergamos la esperanza de que la primera misión de la comisión de investigación de la Unión Africana, actualmente en curso, pueda esclarecer aún más estos ataques, a fin de que los autores de actos atroces respondan ante la justicia.

Una vez más instamos a todas las partes interesadas a emprender el camino del diálogo y la reconciliación nacional, en interés de la población de Sudán del Sur.

Sr. Pankin (Federación de Rusia) (*habla en ruso*): Agradecemos a la Sra. Pillay y al Sr. Dieng sus exposiciones informativas sobre los resultados de su visita a Sudán del Sur, país asolado por la crisis. Compartimos su profunda preocupación ante las violaciones masivas de los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario que cometen las dos partes en el conflicto, en particular los monstruosos asesinatos de civiles por motivos étnicos. Esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta el carácter diverso de la joven sociedad de Sudán del Sur. Entre los ejemplos más notables de los enfrentamientos entre estos dos bandos se cuentan los crímenes cometidos en Bentiu y Bor, que podrían considerarse crímenes de guerra.

Esperamos que la visita de la Sra. Pillay y el Sr. Dieng impulse a las partes a poner en práctica sus intenciones declaradas de evitar en el futuro tales crímenes y de llevar ante la justicia a todos los responsables. Confiamos en que el informe que emitirá la próxima semana la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) sobre la situación de los derechos humanos en ese país será sustantivo y contribuirá verdaderamente a abordar los desafíos que se plantean en cuanto a la determinación de la verdad y la lucha contra la arraigada cultura de impunidad prevaleciente en el país.

Aplaudimos las actividades que realiza la comisión de investigación de la Unión Africana sobre Sudán del Sur, que debe complementar eficazmente los esfuerzos de las Naciones Unidas en este ámbito, en particular en lo que respecta a la elaboración de recomendaciones sobre el modo de abordar las causas profundas del conflicto e impulsar un proceso de reconciliación nacional. En particular, nos preocupan los informes sobre una inminente catástrofe humanitaria en Sudán del Sur. El número de desplazados por la violencia supera los 1,2 millones y aproximadamente 5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, cifra que crece rápidamente. Existe una verdadera amenaza de que se produzca una hambruna masiva en el país.

Coincidimos en que el camino hacia la solución de la grave situación humanitaria y de derechos humanos es el arreglo político del conflicto armado. Los líderes de ambas partes en conflicto deben, de una vez por todas, dejar de lado sus propias ambiciones y comenzar a buscar una solución a la crisis por medios pacíficos mediante la aplicación del acuerdo de 23 de

enero. Acogemos con gran beneplácito los denodados esfuerzos que realizan los asociados internacionales, en particular la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, con miras a lograr una solución negociada y un alto el fuego. La comunidad internacional —representada, entre otros, por el Consejo— debe apoyar debida y oportunamente esos esfuerzos.

En lo que respecta a las exhortaciones recientes y crecientes en pro de la aprobación de sanciones selectivas del Consejo de Seguridad contra los llamados saboteadores del proceso de paz en Sudán del Sur, se trata de un tema que es preciso abordar con suma cautela y prudencia. Se trata de una cuestión que se debe abordar de manera plena, teniendo en cuenta factores tanto internos como regionales. Nuestra amplia experiencia colectiva demuestra que las sanciones distan de ser una panacea y nunca han sido un instrumento eficaz para lograr arreglos políticos de los conflictos. Por otra parte, las sanciones pueden debilitar el espíritu de cooperación y es importante sondear las opiniones de los principales actores regionales respecto de esa iniciativa.

Los trágicos acontecimientos que han tenido lugar recientemente han puesto en entredicho la eficacia de la dirección de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur. A pesar de contar con un presupuesto de casi 1.000 millones de dólares, un contingente integrado por numerosos efectivos y un mandato sólido, la Misión no ha podido garantizar plenamente la protección de los civiles, incluso dentro de sus propias instalaciones, que, por cierto, no están concebidas para albergar a decenas de miles de civiles por largos períodos. El examen del mandato y el aumento del nivel máximo de la fuerza que se han previsto deben orientarse específicamente hacia el mejoramiento del cumplimiento de sus funciones y la ejecución de las tareas encomendadas a la Misión por el Consejo de Seguridad.

Para concluir, debemos señalar que los acontecimientos actuales en Sudán del Sur son solo el triste resultado más reciente de la insensata maquinación de los principales asociados de Juba, que han tratado de ocultar la verdad y de encubrir a sus titeres.

Sir Mark Lyall Grant (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (*habla en inglés*): Sr. Presidente: Gracias por convocar esta sesión sobre la difícil situación que enfrenta el pueblo de Sudán del Sur. Quisiera dar las gracias a la Alta Comisionada, Sra. Pillay, y al Secretario General Adjunto, Sr. Dieng, por su oportuna visita a Sudán del Sur y por las exposiciones informativas que nos ofrecieron el día de hoy.

Un millón de personas se han visto desplazadas y millones más necesitan asistencia humanitaria debido al conflicto que se está desencadenando en Sudán del Sur. Hoy escuchamos información sobre atroces violaciones y abusos de los derechos humanos, y el horror continúa. El pueblo de Sudán del Sur está pagando el precio más elevado posible y ahora enfrenta el riesgo de una hambruna. Los ataques selectivos contra civiles, incluidos los recientes ataques cometidos en Bentiu contra personas que se hallaban en hospitales y lugares de culto, así como contra personas que recibían protección de las Naciones Unidas en Bor, demuestran la gran vulnerabilidad de la población civil en situaciones de conflicto.

La dimensión claramente étnica del conflicto en Sudán del Sur es particularmente alarmante. Hace tan solo dos semanas, la comunidad internacional conmemoró el vigésimo aniversario del genocidio de Rwanda. Esa reunión fue un recordatorio aleccionador de lo que puede suceder cuando, ante pruebas claras de que se cometieron atrocidades, no tomamos medidas en forma colectiva. Los motivos étnicos de los ataques selectivos contra la población civil en Sudán del Sur deben ser una llamada de atención para todos nosotros. El uso de la radio, por ejemplo, en Bentiu para incitar a la violencia por motivos étnicos y a la violencia sexual trae a la mente los trágicos acontecimientos ocurridos en Rwanda hace dos decenios. Tenemos que utilizar mejor los instrumentos para luchar contra esta práctica, incluido el uso por las Naciones Unidas de la radiodifusión de la información pública en el país.

En cuanto a los derechos humanos, está claro que se han cometido y se siguen cometiendo violaciones y abusos graves a medida que se alarga el conflicto. El uso de la violencia sexual como arma de guerra y el reclutamiento de niños como combatientes por ambos bandos en el conflicto son particularmente inquietantes. El UNICEF estima que ambas partes han reclutado a más de 9.000 niños.

Doy las gracias a la Alta Comisionada, Sra. Pillay, y al Secretario General Adjunto, Sr. Dieng, por transmitir las preocupaciones urgentes de la comunidad internacional a los líderes de ambas partes en el conflicto. Esperamos que el Presidente, Sr. Kiir, y el ex-Vicepresidente, Sr. Riek Machar, actúen de inmediato ante estas inquietudes. Todos los líderes políticos deben asumir responsabilidad completa y personal por los continuos combates y el sufrimiento del pueblo. Deben adoptar medidas de inmediato para poner coto a las violaciones y los abusos de los derechos humanos, entablar con seriedad conversaciones de paz y permitir el acceso

pleno del personal humanitario. Lo hemos dicho antes, pero no se han esas tomado medidas y las necesidades se vuelven cada vez más acuciantes.

Mirando hacia delante, tenemos que centrarnos en tres ámbitos de actividad.

Primero, debemos poner fin a la impunidad. La rendición de cuentas y la justicia son fundamentales para la cicatrización de las heridas y la reconciliación nacional. Las denuncias de violaciones y abusos deben investigarse a fondo y de forma imparcial. Los responsables tienen que responder por sus actos. Respaldamos a la comisión de investigación de la Unión Africana y esperamos con interés los resultados de sus investigaciones. No obstante, con la diferente labor nacional, de la Unión Africana y las Naciones Unidas en curso en este ámbito, sería útil que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) determinara las distintas vías de que se dispone para la rendición de cuentas en Sudán del Sur. Además, solicitamos al ACNUDH que considere investigar a fondo y que informe de las atrocidades cometidas recientemente en Bentiu y Bor. También esperamos que el Consejo de Derechos Humanos tome medidas adecuadas ante la situación de los derechos humanos en Sudán del Sur.

Segundo, debemos aumentar el apoyo político a los esfuerzos de mediación. La comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad, tiene que recurrir a todos los medios y las herramientas disponibles para impedir las consecuencias devastadoras de la repetición de las atrocidades en masa y la prolongación del conflicto. La atención, la responsabilidad y las prioridades que damos a la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur son solo una parte de la respuesta. La responsabilidad primordial corresponde a quienes encabezan esta guerra. Tenemos que seguir enviando el mensaje firme y claro de que la comunidad internacional no puede aceptar la situación actual. Apoyamos los esfuerzos incansables de mediación de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo por hallar la paz duradera en Sudán del Sur. Las mujeres y la sociedad civil deben desempeñar un papel en ello, pero quizá sea necesario complementar esos esfuerzos de mediación con sanciones selectivas contra aquellos que obstaculizan la paz y con una reducción del acceso a las armas de los que están involucrados en el conflicto.

Tercero, la seguridad de millones de civiles inocentes en Sudán del Sur debe ser nuestra preocupación principal. Con la lucha que perdura y la estación de lluvias que se avecina, la ya delicada situación

humanitaria podría convertirse en un desastre humanitario. La hambruna está a la vuelta de la esquina. Millones de personas podrían verse condenadas a un sufrimiento indecible que llevaría varios decenios corregir. Las necesidades son urgentes y claras. La comunidad internacional tiene la obligación de ayudar a satisfacer estas necesidades. Tenemos que aumentar la respuesta humanitaria lo más rápidamente posible. El Gobierno británico hará lo que le corresponde y ha desembolsado alrededor de 65 millones de dólares adicionales destinados a la respuesta humanitaria.

La situación en Sudán del Sur es urgente. El pueblo de Sudán del Sur ya ha sufrido demasiado. La comunidad internacional tiene las herramientas para aliviar ese sufrimiento. Tenemos que actuar y hacerlo pronto.

Sr. Gasana (Rwanda) (*habla en inglés*): Sr. Presidente: Gracias por convocar este debate sobre la situación de los derechos humanos en Sudán del Sur. Quisiera dar las gracias a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Navi Pillay, y al Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio, Sr. Adama Dieng, por sus respectivas exposiciones informativas tras su reciente visita a Sudán del Sur. También quisiera saludar al Embajador de Sudán del Sur, Sr. Deng.

Agradecemos al Secretario General que haya enviado a varios equipos de las Naciones Unidas a Sudán del Sur para observar la situación sobre el terreno y por sus mensajes tan claros tanto a los líderes de Sudán del Sur como al Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés en la Oposición.

El 14 de julio de 2011, la Asamblea General aprobó la resolución 65/308, presentada por Rwanda en nombre del Grupo de Estados de África, admitiendo a la República de Sudán del Sur como el Estado Miembro 193º de las Naciones Unidas. Al admitir a esta joven nación, lo hicimos con la esperanza, la expectativa y el deseo de que la comunidad internacional estuviera dispuesta a ayudar a Sudán del Sur a construir sus instituciones del Estado y a forjar un Sudán del Sur unido para todos sus ciudadanos. No obstante, tres años más tarde, si consideramos la matanza generalizada de civiles, así como la situación de los derechos humanos descrita por nuestros ponentes hoy y enfatizada por la Embajadora Samantha Power, no podemos seguir siendo espectadores. No podemos seguir siendo espectadores.

No se puede luchar por la independencia durante años y luego dar la espalda y matar a su propio pueblo. Esto es una vergüenza. Han pasado casi cinco meses

desde el inicio del conflicto en Sudán del Sur. Cientos de civiles inocentes han perdido la vida a causa de su grupo étnico o su afiliación política; 1,5 millones de civiles han sido desplazados. Todo esto sucede mientras el mundo lo observa. Durante nuestras últimas consultas sobre Sudán del Sur, que tuvieron lugar el 23 de abril, vimos imágenes muy dolorosas de cientos de cadáveres apilados en el suelo. Para los rwandeses como yo, esas imágenes nos hacen recordar lo que sucedió hace 20 años. Después del genocidio de 1994 contra los tutsis, la comunidad internacional dijo: “Nunca más”. Ahora decimos “las lecciones aprendidas”. Lamentablemente, estimamos que eso se ha convertido en otra expresión cosmética. De nuevo, es una verdadera pena.

¿Qué hacemos ahora en relación con las continuas matanzas de civiles inocentes en Sudán del Sur? ¿Qué hacemos en relación con las atrocidades en masa cometidas contra civiles en Bentiu y Bor? O, en este caso, ¿qué hacemos ahora cuando oímos a una emisora de radio que, 20 años después de los detestables programas de radiodifusión de la RTLM en Rwanda, ha exhortado a un grupo de la comunidad a violar a mujeres de otro grupo como represalia? ¿Vamos una vez más a condenar y adoptar declaraciones en las que expresamos nuestra indignación?

Recientemente, durante su última sesión como Presidenta del Consejo (véase S/PV.7166), la Embajadora Joy Ogwu, de Nigeria, lamentó que algunas veces nos convirtamos en espectadores y mostremos falta de unidad en el Consejo en razón de intereses nacionales. Espero que sobre esta cuestión el Consejo haga todo lo necesario para detener el asesinato de personas inocentes en Sudán del Sur. Dicho eso, encomiamos a los hombres y las mujeres de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) que, bajo una intensa presión, abrieron las puertas de su complejo a la población civil en peligro, salvando miles de vidas inocentes. Recuerdo que mientras estuve en Kigali durante el vigésimo aniversario del genocidio contra los tutsis, el Secretario General formuló una importante declaración, de gran claridad, en la que afirmó lo siguiente:

“Yo mismo he enviado un mensaje a los representantes de las Naciones Unidas en todo el mundo. El mensaje es simple: cuando vean a personas que corren el riesgo de ser víctimas de crímenes atroces, no esperen instrucciones de lejos; manifiéstense, incluso si ello pudiera ofender. Actúen. Nuestra primera obligación debe ser siempre proteger a las personas —proteger a los seres humanos necesitados y en peligro”. (SG/SM/15755)

Sin embargo, es claramente necesario que hagamos más. Hay millones de personas fuera del complejo de la UNMISS que siguen necesitando nuestra protección. Habida cuenta de que el complejo de la UNMISS no puede recibir a los sudaneses amenazados, debemos encontrar una manera de poner fin a lo que está ocurriendo allí, sin perder más tiempo.

La Ministra de Relaciones Exteriores de Rwanda, Sra. Louise Mushikiwabo, declaró el sábado en Nairobi “Pongamos fin a la idea de que las personas tienen que morir cuando queremos el poder. No mezclemos a los ciudadanos con las luchas por el poder”. Estimamos que el Gobierno de Sudán del Sur tiene la responsabilidad primordial de proteger a los civiles de las atrocidades en masa. Esa responsabilidad recae en el Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (SPLM/A) en las zonas que se están bajo su control.

¿Por qué los niños, las mujeres y los hombres inocentes pagan siempre el precio cuando los políticos luchan por el poder? ¿Por qué? Seamos claros. Los dirigentes serán enjuiciados por todas las atrocidades cometidas por las personas que están bajo sus órdenes. En efecto, tienen la responsabilidad del mando. Invito a los dirigentes de Sudán del Sur a que piensen en el futuro de su país después de la crisis. Las opciones y oportunidades que tienen en la actualidad podrían no existir en el futuro.

Acogemos con agrado la reanudación de negociaciones entre las partes esta semana en Addis Abeba. Quisiera destacar tres elementos clave que, a juicio de Rwanda, mejorarán la actual situación en Sudán del Sur si se les concede prioridad.

En primer lugar, las partes deben poner fin de inmediato a las hostilidades y detener las continuas matanzas de civiles inocentes. Eso salvará a miles de personas desplazadas de la crisis humanitaria, especialmente durante la próxima temporada de lluvias, que agravará aún más la situación. Las partes han firmado el alto el fuego, pero, lamentablemente, no han cumplido sus compromisos. Esta vez, la comunidad internacional debe utilizar todos los recursos necesarios para convencer a las partes de que pongan fin a sus hostilidades si, naturalmente, no pueden hacerlo por sí mismas. Deben garantizar que se respete plenamente el acuerdo de cesación definitiva de hostilidades. Insto a ambas partes a que cooperen plenamente con el mecanismo de vigilancia y verificación dirigido por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD). Asimismo, es urgente que las Naciones Unidas y la IGAD se

pongan de acuerdo lo antes posible sobre cómo se puede apoyar al mecanismo, que incluye el despliegue de una fuerza de protección y de disuasión, con el fin de que se cumpla su mandato. Queremos que las partes tengan la misma comprensión del mecanismo.

En segundo lugar, la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad, tiene la obligación de garantizar que todos los autores de los crímenes atroces sean enjuiciados. A ese respecto, alentamos tanto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como a la Comisión de Investigación de la Unión Africana sobre Sudán del Sur a que aceleren sus investigaciones para que los autores rindan cuentas. Entretanto, el hecho de que tanto el Presidente Salva Kiir como el ex-Vicepresidente Reik Machar se hayan comprometido a investigar las violaciones de los derechos humanos por sus respectivos combatientes, especialmente las matanzas étnicas de Juba en diciembre y las recientes atrocidades ocurridas en Bentiu y Bor, es sumamente alentador y debe plasmarse en medidas tangibles.

En tercer lugar, con respecto a la actual mediación de la IGAD en Addis Abeba, las partes deben poner por encima de sus propios intereses el interés nacional y participar en un diálogo constructivo con el fin de encontrar una solución política sostenible. En ese contexto, Rwanda acoge con agrado la decisión adoptada por el Presidente Kiir de liberar a los cuatro detenidos restantes arrestados después del estallido de la crisis en diciembre, y de desestimar los cargos contra ellos. Aunque eso creará un mejor entorno para las negociaciones, la disposición favorable recientemente manifestada por el Presidente Kiir con respecto a celebrar conversaciones directas con el Sr. Machar también es encomiable. Además, estimamos que la actual iniciativa del diálogo en el interior del partido SPLM, lanzada recientemente en Addis Abeba, podría ser otro hito para identificar líneas de fractura en el proceso político de Sudán del Sur y, de ese modo, llevar a las reformas políticas necesarias. Aprovechamos esta oportunidad para encomiar a la IGAD por su compromiso de encontrar una solución a la crisis y de manifestar nuestro interés en la próxima cumbre de la IGAD sobre la crisis en Sudán del Sur.

A medida que seguimos instando a la UNMISS a que garantice una mayor protección de los civiles, es necesario que la Secretaría acelere el pleno despliegue de contingentes adicionales mediante la cooperación entre misiones, como se autoriza en la resolución 2132 (2013). Eso es importante para aumentar la capacidad de protección de la Misión. A ese respecto, instamos a

todas las partes interesadas, especialmente los donantes, a que apoyen a la Misión sobre el terreno y proporcionen la capacidad aérea necesaria para desplegar rápidamente los contingentes y el personal de policía necesarios. Además, también es importante que el Gobierno de Sudán del Sur mejore sus relaciones con la UNMISS y considere que la Misión es un asociado en la restauración de la paz.

Para concluir, hago un llamamiento a todos para que ejerzamos nuestras responsabilidades respectivas a fin de resolver la crisis en Sudán del Sur. Las partes beligerantes del Movimiento y Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM/A) deben poner fin a la guerra y a la matanza de civiles y entablar un diálogo genuino. La IGAD y los países de la región deben esforzarse para ayudar a las partes a encontrar una solución para el conflicto, y las Naciones Unidas deben proteger a los civiles de manera eficaz, garantizar el fin de las hostilidades y las matanzas y velar por que los responsables de los delitos cometidos en Bentiu, Bor y otros lugares de Sudán del Sur respondan por sus delitos.

También aguardo con interés la propuesta de los Estados Unidos de un proyecto de resolución, y la posibilidad de colaborar al respecto.

Sr. Araud (Francia) (*habla en francés*): Doy las gracias a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Navi Pillay, y al Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio, Sr. Adama Dieng, por sus exposiciones informativas.

La señal de alarma que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dado no puede dejar al Consejo indiferente. La situación en Sudán del Sur es sumamente grave. El país se ha convertido en una zona donde impera la anarquía. Las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario se multiplican, incluidos los ataques deliberados contra civiles, la violencia sexual a gran escala y el reclutamiento de niños soldados. Se ha iniciado un ciclo de represalias, alimentado por los llamamientos públicos a la violencia y el odio. Los programas de radio intensifican ese círculo vicioso al exhortar a la violación de las mujeres de las comunidades enfrentadas. Estamos haciendo frente a una peligrosa tendencia hacia el conflicto entre comunidades opuestas, que está siendo explotada por ambas partes.

La situación humanitaria es igualmente preocupante. El número de personas desplazadas y de refugiados aumenta día a día. Casi 5 millones de personas

necesitan asistencia humanitaria. En particular, la situación en los campamentos de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), que sigue acogiendo a cerca de 80.000 civiles, se ha deteriorado notablemente. La estación de lluvias exacerba aún más la situación, y hay amenaza de hambruna.

Ambas partes son responsables de esa trágica situación y de las graves violaciones que se comenten contra la población civil. Las masacres en Bentiu y Bor han demostrado una vez más que el monopolio de la violencia o de las atrocidades no es de nadie. Apoyamos los esfuerzos de mediación de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), pero debemos reconocer que, en la actualidad, el proceso político se encuentra estancado. El 23 de enero se firmó un acuerdo de alto el fuego, pero las partes siguen negándose a entablar conversaciones de paz y solo actúan en función de las conquistas de territorio que puedan lograr, sobre todo en las zonas productoras de petróleo.

El Gobierno de Sudán del Sur, al igual que las fuerzas de la oposición, debe poner coto a las incitaciones al odio y a los ataques contra el personal de las Naciones Unidas. La reanudación de las conversaciones en Addis Abeba, el 28 de abril, es una señal alentadora. Pedimos, al igual que la IGAD, que el Sr. Salva Kiir y el Sr. Riek Machar entablen conversaciones directas para poner fin al círculo vicioso de masacres y decidir una tregua de un mes, que será esencial para que los habitantes de Sudán del Sur puedan sembrar sus campos.

Si bien las autoridades tienen la responsabilidad primordial de proteger a sus ciudadanos, la comunidad internacional debe adoptar las medidas necesarias que garanticen la protección de las poblaciones amenazadas. El Consejo no puede permanecer indiferente ante la situación imperante en el país. Por ello, Francia está de acuerdo en que se examine con rapidez el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS). Todas sus capacidades deben destinarse a aumentar la protección de los civiles, el respeto de los derechos humanos y el libre acceso a la asistencia humanitaria.

Conscientes de la falta de voluntad política para llegar a un acuerdo de paz, también consideramos que el Consejo de Seguridad debe considerar la posibilidad de establecer un régimen de sanciones contra las personas que se oponen al proceso político. Para responder a las preguntas legítimas de la Federación de Rusia, en una etapa inicial, el régimen no incluiría nombres, sino que sencillamente se utilizaría como medio para ejercer presión sobre ambas partes.

El reino de la impunidad en Sudán del Sur no puede continuar. Deben llevarse a cabo de inmediato investigaciones independientes e imparciales. Los responsables deben ser juzgados y condenados, independientemente de su afiliación política. La comisión de investigación de la Unión Africana debe reunir pruebas de los delitos cometidos. Los ataques, en particular los que se cometen contra las bases de las Naciones Unidas, constituyen crímenes de guerra. Habida cuenta de la gravedad y la magnitud de los delitos, y en el marco del diálogo con la IGAD y la Unión Africana, también tenemos que considerar la remisión a la Corte Penal Internacional.

Sr. Hmoud (Jordania) (*habla en árabe*): Quisiera dar las gracias a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Navanethem Pillay, y al Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio, Sr. Adama Dieng, por la valiosa información que nos han proporcionado en sus exposiciones informativas. También quisiéramos expresar nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a todo el personal de la Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), así como a otras entidades internacionales, por la labor que realizan en Sudán del Sur, en circunstancias sumamente difíciles.

Quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por el deterioro de la situación en Sudán del Sur, la continuación de las matanzas y las graves violaciones humanitarias cometidas por ambas partes en el conflicto. También quisiéramos hacer hincapié en la importancia de poner fin de inmediato a la incitación mutua, que contribuye a la propagación del odio y al fomento de las divisiones étnicas y tribales en la sociedad de Sudán del Sur. También quisiéramos hacer hincapié en los siguientes aspectos.

En primer lugar, está claro que, varios meses después del estallido de la crisis en Sudán del Sur, y pese a la plena participación del Consejo, los infatigables esfuerzos internacionales para contener la crisis y poner fin al sufrimiento humano, así como los esfuerzos desplegados por las partes en África para traducir el acuerdo sobre la cesación de las hostilidades en la base que pueda sustentar nuestra labor, aún estamos muy lejos de la estabilidad duradera, el diálogo político o la reconciliación nacional que todos procuramos.

La solución de la crisis en Sudán del Sur está directamente relacionada con el cumplimiento por ambas partes de sus compromisos y sus promesas en virtud del acuerdo de cesación de las hostilidades. Ello presupone

la disposición, la capacidad y el compromiso de los dirigentes sobre el terreno para poner en práctica ese acuerdo.

Sin embargo, ha quedado claro que, a pesar de los compromisos asumidos por los dirigentes de las dos partes ante la comunidad internacional en los intercambios bilaterales, la situación sobre el terreno se ha deteriorado aún más. Ello a su vez plantea dudas sobre la credibilidad de las partes cuando se trata de la comunidad internacional y de sus esfuerzos.

Hemos subrayado anteriormente la importancia de determinar cuáles son las zonas más vulnerables a las violaciones y la importancia del despliegue de esfuerzos para proteger a los civiles. Quisiéramos poner de relieve una vez más la importancia de las medidas preventivas para impedir que se repitan los hechos que tuvieron lugar recientemente en Bentiu y Bor. También debemos destacar la importancia de tener en cuenta la distribución de los grupos de población más vulnerables a las violaciones al desplegar nuevas fuerzas.

Para concluir, reiteramos la necesidad de que el Gobierno de Sudán del Sur y la oposición asuman sus responsabilidades a fin de someter a la justicia a los responsables de violaciones y otros delitos. La comunidad internacional y el Consejo de Seguridad deben ejercer presión sobre ambas partes y considerar las medidas que podrían adoptarse con el fin de enjuiciar a esos delincuentes, incluida la posibilidad de remitir la situación a la Corte Penal Internacional. Quisiéramos poner de relieve lo que la Sra. Pillay y el Sr. Dieng han dicho, es decir, que no habrá paz sin justicia. Por tanto, se deberían realizar esfuerzos para cambiar la cultura de la impunidad en Sudán del Sur, y el Consejo de Seguridad debe centrar sus esfuerzos en consonancia con esa premisa.

Sra. Murmokaité (Lituania) (*habla en inglés*): Sr. Presidente: Le doy las gracias por haber organizado esta sesión informativa. Quisiera también dar las gracias a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Sra. Navanethem Pillay, y al Enviado Especial para la Prevención del Genocidio, Sr. Adama Dieng, por sus amplias exposiciones informativas.

Apenas el mes pasado, conmemoramos el vigésimo aniversario del genocidio de Rwanda (véase S/PV.7155). Al aprobar la resolución 2150 (2014), reiteramos nuestro compromiso de prevenir el genocidio y luchar contra él y contra otros crímenes graves de lesa humanidad. Reiteramos también el principio de la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa

humanidad. Sin embargo, tres años después de la independencia de Sudán del Sur, los informes de ese país parecen catálogos de la barbarie, teniendo en cuenta que todos los agentes —fuerzas del Gobierno, la oposición y las milicias— cometen terribles atrocidades. La incitación, los asesinatos selectivos, la violación y la tortura son ingredientes típicos que conducen a una situación de genocidio. Hasta los lugares que se suponen que sean refugios seguros, como los lugares de culto, los hospitales y las bases de las Naciones Unidas, han sido brutalmente atacados. Los despreciables ataques en Bor contra el complejo de las Naciones Unidas y la matanza de civiles en mezquitas e iglesias en Bentiu merecen la más enérgica condena del Consejo y de toda la comunidad internacional.

Lo que también es alarmante es lo que la Alta Comisionada mencionó: que probablemente se perderá la temporada de siembra y que alrededor de 7 millones de personas pronto enfrentarán una terrible hambruna, y pensar que los dos dirigentes rivales y sus partidarios prefieren seguir su rivalidad sangrienta y no conceder un mes de calma para que la población siembre sus campos, para salvarla del horror de morir de hambre. Sin duda es muy difícil afrontar esos hechos.

Según la declaración del Presidente Salva Kiir, formulada en la mañana de hoy, él está dispuesto a reunirse personalmente con Riek Machar. No hemos escuchado negativa de Machar, y suponemos que también está dispuesto a reunirse. Es absolutamente fundamental que los dos dirigentes renuncien a toda violencia y la denuncien y exhortamos a sus fuerzas y partidarios a que depongan sus armas, dejen de atacar a los civiles y tomen la verdadera senda del diálogo y la reconciliación. Tanto el Gobierno como la oposición armada deben cooperar para investigar los horrendos crímenes que se han cometido. Los responsables deben ser detenidos y enjuiciados con pleno respeto de las normas internacionalmente reconocidas de las debidas garantías procesales. La rendición de cuentas es una obligación. Si no se pone fin a la impunidad, continuarán la violencia y las atrocidades.

El Consejo debe velar por que las investigaciones actuales y futuras examinen hasta qué punto los dirigentes políticos y militares sabían o debían haber conocido lo que estaba ocurriendo, y no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables para impedir los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos mismos o por sus subordinados bajo su control y autoridad verdaderos. Encomiamos los esfuerzos de la comisión de investigación de la Unión Africana y la

exhortamos a que siga documentando todas las atrocidades cometidas por ambas partes. Esperamos con interés el informe de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) sobre las violaciones y los abusos cometidos sobre el terreno. Como ya han dicho algunos oradores, la participación activa del Consejo de Derechos Humanos es también fundamental.

Es hora de que los dirigentes beligerantes antepongan los intereses de su país y su pueblo a los suyos. Tenemos un pequeño destello de esperanza hoy con el anuncio del Presidente Kiir, y exhortamos a los dirigentes a que aprovechen esta oportunidad. Los dirigentes políticos deben cumplir con su palabra y poner fin a la violencia. Por su parte, el Consejo de Seguridad debe garantizar que si eso no sucede, utilicemos todos los instrumentos a nuestra disposición para enviar un mensaje claro y firme de que no se tolerarán más los crímenes de guerra, los crímenes de violencia sexual ni las atrocidades. Entiendo las diferencias de opinión en cuanto al uso de sanciones, pero mi delegación considera que, si nada funciona, la amenaza de sanciones selectivas es un instrumento útil que debería emplearse de manera real e inminente si queremos que las partes beligerantes también cambien su conducta. La remisión a la Corte Penal Internacional debería también estar sobre el tapete.

Hay que fortalecer la disuasión sobre el terreno. Estamos considerando la posibilidad de revisar el mandato de la UNMISS en ese sentido. El despliegue de un Grupo de tareas regional para proteger a los observadores del alto el fuego y disuadir al Gobierno y a las fuerzas rebeldes de atacar deberá realizarse rápidamente. Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a la UNMISS y al Representante Especial Johnson por hacer todo lo posible en circunstancias sumamente difíciles.

Lamentamos los problemas constantes que existen en las relaciones entre el Gobierno de Sudán del Sur y la UNMISS. El Gobierno debe dejar de acosar a la Misión de las Naciones Unidas y a su personal y dejar claro al público que agradece el papel de salvar vidas de la UNMISS y comprometerse plenamente a cooperar con su personal y brindarle seguridad, así como cesar todas las violaciones del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas. Es totalmente inaceptable que una misión de las Naciones Unidas, que desempeña la labor vital en extremas condiciones a riesgo de la vida del personal de paz y respaldada por la comunidad internacional, sea objeto de ataques o abusos de cualquier tipo. Teniendo en cuenta el número cada vez mayor de crisis en el mundo, el personal de paz y los fondos para ellos son

cada vez más necesarios. Las incontables víctimas de la violencia en otras partes estarían felices de que ese personal de paz las estuviera protegiendo, y considero que el Gobierno de Sudán del Sur debería tener ello presente. Realizan una labor fundamental.

Para concluir, llamamos a nuestros líderes “líderes” sencillamente no porque sea la única palabra que tengamos, sino porque esperamos que ellos demuestren un verdadero liderazgo. Si en el futuro el Presidente Salva Kiir y Riek Machar quieren ser considerados líderes por su propio país, este es el momento para que ellos lo demuestren, estén a la altura de ese liderazgo y garanticen que el peligro de destruir la independencia tan arduamente ganada hace unos cuantos años no se convierta en una terrible realidad.

Sr. Barros (Chile): Quisiéramos agradecer a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Pillay y al Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Sr. Adama Dieng, la información entregada y valoramos especialmente que hayan efectuado una visita conjunta a Sudán del Sur.

Chile ha manifestado que la rendición de cuentas en materia de violaciones a los derechos humanos tiene que ser una de las prioridades en la renovación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS). Estamos observando lo que podría ser el comienzo de una catástrofe humanitaria y hay serios indicios que nos obligan a pensar que se está configurando la figura de genocidio y crímenes de lesa humanidad en Sudán del Sur. Si bien es cierto que cada Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus poblaciones contra los abusos masivos y generalizados de los derechos humanos, la comunidad internacional está llamada a apoyar a los Estados cuando estos, de manera voluntaria o por incapacidad manifiesta, no cumplen con esta obligación conforme al concepto de la responsabilidad de proteger, consagrado en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005.

Este Consejo debe actuar pronto. La prevención es posible y debemos utilizar todos los mecanismos de alerta temprana que permitan evitar que se pierdan más vidas humanas, promoviendo asimismo el diálogo entre las partes. No podemos permanecer indiferentes a la información proporcionada por la Sra. Pillay, el 30 de abril pasado, y el UNICEF, sobre la muerte de niños producto de ataques indiscriminados a la población civil, muchos de ellos desplazados internos; el reclutamiento de más de 9.000 niños por las fuerzas armadas de ambos lados

que constituye un crimen de guerra según el Estatuto de Roma; la toma de 32 colegios por parte de grupos armados y los ataques a más de una veintena de clínicas y centros de salud; y la violencia sexual contra niñas y mujeres.

Creemos que estos hechos y los antecedentes que ha recibido este Consejo sobre violaciones a los derechos humanos y otras atrocidades cometidas en Sudán del Sur, incluido los informes de la UNMISS desde que estalló el conflicto en diciembre pasado, son suficientes para empezar a discutir en profundidad el establecimiento de sanciones específicas en contra de los eventuales responsables. Esperamos que la comisión de investigación de la Unión Africana pueda entregar a la brevedad su informe. Confiamos en que exista una coordinación adecuada con la UNMISS, de manera de evitar que se pierdan antecedentes o pruebas que luego dificulten la rendición de cuentas.

Valoramos el coraje y la voluntad de la Sra. Johnson y del personal de la UNMISS para dar protección a los desplazados internos y de continuar con la investigación en materia de violación de los derechos humanos a pesar de la violencia imperante y de los constantes ataques y amenazas. Conforme lo hiciera la Alta Comisionada, extendemos nuestro reconocimiento al personal de mantenimiento de la paz de la India, cuyo accionar ha permitido proteger a numerosos civiles durante esta crisis.

El Consejo y los demás órganos del sistema de las Naciones Unidas deben redoblar los esfuerzos para evitar que se produzca una catástrofe en Sudán del Sur que signifique la desintegración del Estado Miembro más joven de esta Organización. Estimamos oportuno que este Consejo evalúe remitir los antecedentes que posea sobre la situación en Sudán del Sur a la Corte Penal Internacional, de manera de demostrar que podemos tomar acciones concretas que refuercen las que ya llevan a cabo las Naciones Unidas para proteger a la población civil.

Sra. Perceval (Argentina): Sr. Presidente: Gracias por convocar esta sesión. Muchas gracias a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Navi Pillay, y al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio, Sr. Adama Dieng, por sus presentaciones de una misión que era necesaria y cumplió con una función esencial: transmitir que la impunidad no puede ser ni será tolerada.

Creo que es importante que estemos reunidos aquí públicamente, no solo porque lo que podemos decir y hacer hoy puede ayudar a que cesen las hostilidades y los ataques contra la población civil, sino porque, además,

la Argentina cree que por el bien de la transparencia y la rendición de cuentas así debe ser, conforme al principio general establecido en la regla 48 del reglamento provisional del Consejo.

Quiero reiterar nuestro apoyo al trabajo que están haciendo y a los esfuerzos que están llevando a cabo nuestros cascos azules en la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), trabajo que, sin lugar a dudas, ha permitido evitar muchas muertes. Quiero también subrayar la responsabilidad y el esfuerzo de las Naciones Unidas conjuntamente con las organizaciones regionales y subregionales para intentar frenar esta crisis y paliar tanto sufrimiento.

La Argentina comparte la condena en los términos más duros de las serias violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que han sido cometidas por ambas partes en el conflicto de Sudán del Sur en estos últimos meses. Valoramos que, en su visita, la Sra. Pillay y el Sr. Dieng hayan advertido a los dirigentes del país que las investigaciones en curso o futuras inevitablemente indagarán sus responsabilidades en relación con los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se están cometiendo en el país. También consideramos fundamental que les hayan recordado sus responsabilidades en la protección de civiles y la necesidad de poner fin cuanto antes a las hostilidades para evitar que la situación se agrave aún más.

La Argentina apoya la labor de la comisión de investigación de la Unión Africana, labor necesaria para que los responsables de las atrocidades cometidas sean llevados ante la justicia. También creemos que en todas estas investigaciones que se están llevando a cabo —ya sean de la Comisión de la Unión Africana, de la UNMISS o de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos— es de suma importancia establecer las responsabilidades al más alto nivel, ya que no alcanza con juzgar a quienes han ejecutado las aberrantes acciones, sino que es necesario establecer las responsabilidades en toda la cadena de mando. Es necesario poner fin a la impunidad para que cesen las violaciones masivas a los derechos humanos. Sin embargo, también es igualmente necesario alcanzar un acuerdo político.

Al respecto, son escasas las noticias alentadoras que nos llegan desde Sudán del Sur. Tomamos nota de la liberación de los últimos 4 de los 11 detenidos acusados de organizar un golpe de Estado, de los avances respecto de la comisión de investigación de la Unión Africana y

de que aún hay esperanzas de que las partes negocien realmente un cese de las hostilidades conforme se han declarado dispuestas a hacerlo. Pero que lo hagan, porque las víctimas no son invisibles; que lo hagan, porque la muerte habla. Los asesinatos de civiles, de niños y niñas, mujeres y ancianos, por su pertenencia étnica, por el color de su piel; las violaciones de mujeres con el fin de destruir su dignidad para construir venganza; el reclutamiento de miles de niños para llevarlos a la muerte en vez de acompañarlos a vivir libres, sin miedos, la vida; la destrucción de hospitales para derramar epidemias; la ocupación de escuelas para alimentar la ignorancia; la destrucción de pueblos enteros para tener las manos manchadas de petróleo; los llamados al odio para no darles a las comunidades oportunidades a aprender el respeto a los diferentes y a amar la paz: estos crímenes no son invisibles, porque la muerte habla, en Bor y en Bentiu, en todos los rincones y la estamos escuchando.

Por eso, nosotros también debemos ser enormemente responsables, no solo lamentando y condenando las aberraciones o las hambrunas. La Argentina considera que el Consejo de Seguridad debe seguir apoyando, tomar o evaluar respectivamente y cuanto antes las siguientes medidas.

Primero, la Argentina no tiene duda alguna de que lo más importante en este momento es dar toda la protección necesaria a las decenas de miles de personas que han buscado refugio en manos de la UNMISS y a las que han quedado sin protección. Urge tomar una decisión respecto de la solicitud del Secretario General de incrementar la cantidad de efectivos de la UNMISS y velar en caso de aprobación por su efectiva implementación.

Segundo, definir el apoyo que las Naciones Unidas darán para que pueda desplegarse la fuerza regional decidida por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo.

Tercero, anhelamos que no sea una promesa vacía el compromiso de garantizar que las víctimas encuentren justicia y reparación a nivel nacional en Sudán del Sur. Confiamos en que la promesa no sea vacía, pero recordamos asimismo que, cuando un país no puede o no quiere hacer justicia, existe la Corte Penal Internacional, mecanismo que la Argentina apoya y defiende.

Cuarto, condenando una vez más las acciones del Gobierno de Sudán del Sur y de las fuerzas que le son leales respecto de la UNMISS y de la asistencia humanitaria, la Argentina cree que las actividades de la UNMISS deben únicamente centrarse en las cuestiones vinculadas a la protección de los civiles, los derechos

humanos y la asistencia humanitaria. No creemos que haya margen para destinar recursos a otro tipo de tareas.

Para terminar, quiero reiterar nuestra preocupación respecto de las repercusiones regionales que puede tener el conflicto, en particular respecto de la presencia de tropas extranjeras en el país. También quisiera compartir la pregunta de la Sra. Pillay en la conferencia de prensa que diera el 30 de abril: “¿Cuánto peor tiene que tornarse todo antes de que quienes pueden poner fin a este conflicto, especialmente el Presidente Kiir y el Sr. Machar, decidan hacerlo?”

Sra. Lucas (Luxemburgo) (*habla en francés*): Quisiera dar las gracias a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Navi Pillay, y al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio, Sr. Adama Dieng, por sus palabras conmovedoras, que reflejan a la vez la gravedad de la situación en Sudán del Sur y la voluntad de las Naciones Unidas de poner en práctica la iniciativa del Secretario General “Los derechos en primer lugar”, que sitúa la lucha contra las violaciones de los derechos humanos en primera línea para prevenir las atrocidades masivas.

Luxemburgo condena en los términos más enérgicos los atentados cometidos en Bentiu y Bor, que han cobrado cientos de víctimas civiles, entre ellas, mujeres y niños. Esos atentados son los ejemplos más recientes de las graves violaciones y atrocidades cometidas contra civiles, a menudo por motivaciones étnicas, que han sido atribuidas a ambas partes desde que se iniciara en conflicto, el 15 de diciembre de 2013. Los abusos contra los civiles han causado probablemente miles de muertes. Han causado el desplazamiento de más de 1 millón de personas.

Los dirigentes de Sudán del Sur que están en controversia deben finalmente asumir su responsabilidad y poner fin a la matanza. Es inaceptable que las fuerzas gubernamentales y las fuerzas de la oposición sigan transgrediendo el acuerdo de cesación de las hostilidades concertado el 23 de enero y que las partes se obstinen en negarse a participar en negociaciones políticas. Continuamos respaldando plenamente los esfuerzos de mediación que realiza la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD). Queremos aprovechar esta oportunidad para instar con urgencia a las partes para que comiencen a abordar las cuestiones sustantivas de buena fe y sin más demoras. A medida que la situación humanitaria sigue deteriorándose, cada día que se pierde en la mesa de negociaciones aumenta el peligro de hambruna para la población de Sudán del Sur.

Condenamos enérgicamente las violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se siguen cometiendo con impunidad en Sudán del Sur. El panorama descrito esta tarde por la Sra. Pillay y por el Sr. Dieng es aterrador. Al Presidente Salva Kiir y al ex-Vicepresidente Riek Machar les incumbe una onerosa responsabilidad. Deben rechazar de manera pública e imperiosa todos los ataques contra civiles y comprometerse a detener y a enjuiciar a los que ordenen o cometan los atentados. La lucha contra la impunidad es una prioridad para nosotros. Los responsables de violaciones graves, incluidos los que ordenaron, incitaron, alentaron o toleraron esas violaciones y abusos, deben comprender que la comunidad internacional los observa, que sus crímenes no pasarán desapercibidos y que deberán responder por ellos.

En ese sentido, acogemos con beneplácito la publicación, el lunes próximo, del informe final de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) sobre las violaciones de derechos humanos. También celebramos la iniciación de la comisión de investigación de la Unión Africana, encabezada por el ex-Presidente de Nigeria, Sr. Olusegun Obasanjo, quien acaba de efectuar su primera misión a Sudán del Sur.

Ese informe de las Naciones Unidas y la labor de investigación de la Unión Africana son importantes, pero debemos ir más allá. No cabe duda de que se han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En este contexto, consideramos que, a fin de luchar contra la impunidad e impedir la comisión de nuevas atrocidades, el Consejo debe examinar con seriedad la posibilidad de remitir la situación a la Corte Penal Internacional.

En términos más generales, el Consejo de Seguridad tiene que considerar todos los medios de que dispone, incluido el establecimiento de un régimen de sanciones, para que las partes entren en razón, pongan fin a las hostilidades y eviten que se agrave la situación, cuyas consecuencias serían incalculables. Debería considerarse la aprobación de sanciones selectivas contra quienes han cometido violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, quienes han violado el acuerdo de cesación de las hostilidades y quienes han obstaculizado el avance de las conversaciones de paz.

Acogemos con beneplácito la importante labor realizada por la UNMISS para proteger a los civiles, en especial a los civiles refugiados en sus bases, que viven en condiciones sumamente difíciles. Condenamos

las restricciones que afronta la UNMISS, el acoso que padece su personal y las persistentes transgresiones del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas. El Consejo de Seguridad debería examinar el mandato de la Misión para centrar su atención en tres prioridades, a saber, la protección de los civiles, la facilitación del suministro de asistencia humanitaria y la vigilancia de los derechos humanos. Asimismo, es imprescindible fortalecer la Misión, integrando, en términos que habrán de convenirse, las fuerzas propuestas por la IGAD.

Luxemburgo condena de la forma más enérgica el reclutamiento y la utilización de niños, el asesinato y la mutilación de niños, la violencia sexual, los atentados contra escuelas y hospitales y la utilización de escuelas por todas las partes en el conflicto. Recordamos a las partes que, de conformidad con el acuerdo de cesación de las hostilidades, convinieron en no reclutar ni utilizar a niños. Las últimas cifras del UNICEF, según las cuales más de 9.000 niños han sido reclutados y utilizados por las partes en el conflicto, resultan simplemente indignantes. Recordamos que, el 13 de marzo de 2012, el Gobierno de Sudán del Sur suscribió un plan de acción para poner fin al reclutamiento y utilización de niños y prevenir ese flagelo. Toda transgresión de dicho plan de acción constituye una violación de las obligaciones contraídas por el Gobierno.

Ante la magnitud de las violaciones cometidas y de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre los niños y los conflictos armados, la UNMISS tiene que aumentar la vigilancia y el intercambio de información sobre violaciones y abusos cometidos contra niños; y se debería dotar a la Misión de los recursos necesarios para hacerlo. También alentamos a la comisión establecida por la Unión Africana a investigar esas violaciones y abusos.

Para concluir, quisiera asegurar a la Sra. Pillay y al Sr. Dieng que hemos escuchado su llamamiento. El Consejo deberá actuar con firmeza para eliminar la amenaza inminente de una violencia aún más grave, que corre el peligro de descontrolarse. Nuestra responsabilidad colectiva consiste en actuar para prevenir, 20 años más tarde, un nuevo genocidio en el continente africano.

El Presidente (*habla en inglés*): Formularé ahora una declaración en mi calidad de representante de la República de Corea.

Doy las gracias a la Alta Comisionada, Sra. Navi Pillay, y al Asesor Especial, Sr. Adama Dieng, por sus exposiciones informativas. Consideramos que el Consejo comparte plenamente su urgente llamamiento para

que se preste atención y se adopten medidas. Los asesinatos por motivos étnicos que se cometen en Sudán del Sur son inaceptables y se les debe poner fin. Hace solo quince días, el Consejo de Seguridad convocó un debate público con ocasión del vigésimo aniversario del genocidio cometido en Rwanda y reafirmó que nunca jamás deberían cometerse crímenes de esa naturaleza (véase S/PV.7155). El uso de transmisiones radiofónicas para incitar a la violencia étnica recuerda el preludio de esa catástrofe, lo que agrega una dimensión nueva y peligrosa a la crisis. Instamos tanto al Presidente Salva Kiir como al Sr. Riek Machar a que públicamente declaren su firme oposición a todo atentado contra civiles y su compromiso de tratar de lograr la rendición de cuentas. Todos los dirigentes políticos y tribales de Sudán del Sur deben declarar públicamente su oposición a la violencia y, en consecuencia, deben adoptar medidas responsables. Esperamos con interés el informe final de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) sobre violaciones de derechos humanos.

Ante el inicio de la temporada de lluvias, nos preocupa profundamente la difícil situación que atraviesan más de 1 millón de personas desplazadas. Los emplazamientos de la UNMISS para la protección de los civiles ya están abarrotados, y nunca fueron diseñados para hacer frente a la enorme tarea de proteger a un número ingente de civiles. Debería elaborarse una estrategia amplia tendiente a proteger a los civiles a fin de aprovechar al máximo la capacidad de la UNMISS. También alentamos a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) a que aumente sus esfuerzos de mediación.

El recrudecimiento de los combates en las zonas petroleras amenaza con desencadenar una intensificación regional del conflicto. Las Naciones Unidas y la IGAD deben finalizar con rapidez las modalidades destinadas a aplicar los mecanismos de vigilancia y verificación, de conformidad con el acuerdo de cesación de las hostilidades. Únicamente una solución política podrá normalizar la situación. El Consejo debe estar dispuesto a adoptar medidas adicionales para desalentar a los obstruccionistas y acelerar el logro de la estabilidad.

Reanudo ahora mis funciones como Presidente del Consejo.

Tiene la palabra el representante de Sudán del Sur.

Sr. Deng (Sudán del Sur) (*habla en inglés*): Sr. Presidente: Agradezco a usted y a los miembros del Consejo de Seguridad la oportunidad que me brindan de dirigirme al Consejo para abordar cuestiones de importancia crítica para nuestro país. Como esta es la primera vez

que me dirijo al Consejo de Seguridad bajo la Presidencia de la República de Corea, permítame felicitarlo y garantizarle nuestro apoyo y nuestra cooperación. También deseo felicitar a su predecesora por su exitosa dirección de la labor del Consejo durante el mes de abril.

Mi delegación y yo hemos escuchado con gran interés las declaraciones profundamente conmovedoras que se han formulado, así como las preocupaciones expresadas esta tarde por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Navi Pillay; por el Asesor Especial de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Genocidio, mi sucesor y hermano menor, Sr. Adama Dieng; y por los miembros del Consejo de Seguridad. Deseo dar las gracias a la Alta Comisionada y al Asesor Especial por haber visitado nuestro país y por dar a la crisis actual una prioridad tan alta. Deseo asegurarles, y de hecho asegurar a todos los miembros del Consejo, que agradecemos sinceramente y compartimos verdaderamente sus profundas preocupaciones y su compromiso de poner fin a la violencia.

Como ya he dicho anteriormente al Consejo, si bien es doloroso escuchar los informes sobre la trágica situación en nuestro país, nuestra respuesta no es ponernos a la defensiva o negar los hechos. Reconocemos que lo que motiva esos informes es la intención de ayudar a Sudán del Sur a enfrentar la crisis, en cooperación con la comunidad internacional. Es por ello que hemos expresado constantemente nuestro agradecimiento más sincero al Consejo de Seguridad, en particular, y a la comunidad internacional, en general, por su firme compromiso y su apoyo.

Nadie que crea en los ideales de los derechos humanos y en la prevención del genocidio y otras atrocidades similares puede cuestionar los llamamientos y las advertencias que hicieron la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio y los miembros de Consejo. Como ya he dicho en varias ocasiones, nuestro pueblo luchó durante decenios contra la discriminación y las violaciones graves de los derechos humanos. Luchamos por la igualdad y la dignidad humana, que constituyen los fundamentos de los derechos humanos. Esos principios deberían guiarnos en la edificación de nuestra nación.

Si bien la tendencia a aplicar la equivalencia moral puede parecer comprensible como táctica, e incluso como estrategia, para conseguir que las partes participen sobre la base del reconocimiento y el respeto mutuos, se corre el riesgo de equiparar lo correcto a lo incorrecto de una

manera que enturbia la situación sobre el terreno. Por supuesto, es indiscutible que el Gobierno debe asumir la responsabilidad primordial de proteger a sus ciudadanos, sin discriminación por motivos étnicos o de cualquier otra índole, y que debe rendir cuentas en ese sentido. Sin embargo, eso no puede justificar que se apliquen a un Gobierno elegido democráticamente las mismas pautas morales, políticas y jurídicas que a un grupo rebelde que utiliza la violencia para derrocar al Gobierno.

El Presidente de Sudán del Sur, Sr. Salva Kiir, me indicó hoy que había dicho a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y al Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio que, si disponían de tiempo para permanecer en el país, les aseguraría el acceso pleno y libre de obstáculos para que pudieran tener una idea del alcance de la violencia y comprender mejor la situación, así como qué estaba haciendo cada quien. El Presidente también me habló sobre las conversaciones constructivas que sostuvo con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Sr. John Kerry, a quien expresó su disposición a reunirse con el líder rebelde Riek Machar con miras a poner fin rápidamente a la guerra.

Reconocemos que las personas no toman las armas para matar, corriendo el riesgo de perder la vida, si no existe una causa o un agravio que se deba abordar. Es por ello que nuestro Gobierno, en particular el Presidente Kiir, ha afirmado en repetidas ocasiones que mantiene su compromiso de dialogar con los rebeldes con miras a poner fin rápidamente a la violencia y promover la paz, la unidad y la reconciliación nacional.

En lo que respecta a cuestiones concretas planteadas por la Alta Comisionada y el Asesor Especial en sus exposiciones informativas, la afirmación de que ambas partes están reclutando niños soldados es un ejemplo de la equivalencia moral que enturbia los hechos y de la necesidad de asignar la responsabilidad a quien corresponde. Como bien se sabe, desde 2003 el Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán (SPLA) puso fin al reclutamiento o despliegue de niños soldados. Ese hecho ha sido reconocido por los órganos pertinentes de las Naciones Unidas, que han encomiado a Sudán del Sur por esa decisión. Aunque recientemente las exigencias de la guerra han incrementado la necesidad de reclutar nuevos efectivos, sobre todo debido a que un gran número de soldados ha desertado y ha pasado a las filas de los rebeldes, eso no ha entrañado en absoluto el reclutamiento de niños soldados. Como me dijo hace poco un miembro prominente del Gobierno, nuestro problema es el inverso, a saber, que tenemos un ejército que envejece. A diferencia del ejército del Gobierno, es un hecho bien conocido

que el ejército rebelde recluta y despliega niños soldados; un ejemplo notorio de esto es su “Ejército Blanco”.

En cuanto a la cuestión de las violaciones de los derechos humanos en general, el Presidente Kiir las ha condenado en forma inequívoca y, en respuesta a los acontecimientos recientes, ha creado un comité de alto nivel que está presidido por el ex-Presidente del Tribunal Supremo para investigar las violaciones graves de los derechos humanos y exigir la rendición de cuentas de los responsables. Durante el estallido de violencia que tuvo lugar en Juba los días 15 y 16 de diciembre, el Presidente llegó a decir que cualquier persona que atacara en su nombre a los miembros de la comunidad nuer estaba en su contra. El Gobierno también ha acogido y ha prometido su apoyo a la comisión de investigación de la Unión Africana sobre Sudán del Sur, encabezada por el ex-Presidente de Nigeria, Sr. Olusegun Obasanjo, que tiene a su cargo investigar las violaciones de los derechos humanos resultantes de la crisis actual. Eso contrasta acentuadamente con la situación de los derechos humanos en la zona de los rebeldes, donde los abusos masivos y las masacres por motivos étnicos se han convertido en un componente característico de su estrategia de guerra, sin que sus dirigentes hayan dicho siquiera una palabra de condena de tales actos.

Es desafortunado que el muy lamentable incidente en el que hubo jóvenes que atacaron el complejo de las Naciones Unidas en Bor se equipare a las atrocidades cometidas por el ejército rebelde en Bentiu y Malakal. El incidente de Bor, que fue condenado enérgicamente por el Gobierno, se originó cuando los jóvenes de la aldea de Bor escucharon a los desplazados internos en el complejo de las Naciones Unidas celebrar la captura de Bentiu por los mismos rebeldes que recientemente habían destruido Bor y asesinado a sus habitantes. El incidente se derivó de un acto inicialmente concebido como una manifestación pacífica para presentar una carta de protesta a la Misión de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS), en la que se solicitaba que se expulsara de Bor a los desplazados internos, cuya presencia los jóvenes percibían como una provocación.

La protesta pacífica se fue de las manos cuando los efectivos de mantenimiento de la paz dispararon al aire para impedir que los jóvenes entraran al campamento, lo cual los jóvenes interpretaron como un ataque contra ellos, que los impulsó a entrar por la fuerza en el campamento. Deseo señalar que las autoridades de Gobierno locales habían informado a la UNMISS sobre la intención de los jóvenes de manifestarse y que el SPLA, en colaboración con la UNMISS, actuaron de consuno para

calmar la situación. Esa es una muestra clara de que el Gobierno considera a la UNMISS un asociado esencial en Sudán del Sur.

Como se informó en las exposiciones informativas del día de hoy, en Bentiu, los rebeldes masacraron a cientos de civiles, entre ellos personas que habían buscado cobijo o refugio en iglesias y mezquitas, así como pacientes que recibían atención en los hospitales. Todo ello ha sido enérgicamente deplorado y condenado por nuestro Gobierno.

Antes de concluir mis observaciones, quisiera destacar dos puntos que considero cruciales para aportar una respuesta constructiva a la crisis de nuestro país.

En primer lugar, valoramos en gran medida los esfuerzos concertados de la comunidad internacional en apoyo al proceso de paz de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y la Unión Africana. Instamos a continuar y, ciertamente, a intensificar la participación al más alto nivel para poner fin en breve plazo a esa violencia devastadora y sin sentido.

En segundo lugar, todos reconocemos que, después de la larga guerra en el Sudán, Sudán del Sur se ha visto debilitado y tiene una capacidad sumamente limitada para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad internas. Su capacidad para prestar servicios sociales y generar y mantener el desarrollo socioeconómico que tanto se necesita también está drásticamente limitada. De hecho, ese fue el motivo del apoyo ambicioso y múltiple que creó la UNMISS. La actual crisis se está debilitando y, de hecho, sigue reduciendo la limitada capacidad del Estado. Es comprensible que las Naciones Unidas deben reexaminar las prioridades a la luz de la crisis, en particular para apoyar el proceso de paz, proteger a los civiles, prestar asistencia humanitaria y promover el respeto de los derechos humanos.

Sin embargo, Sudán del Sur también necesita apoyo para el fomento de la capacidad, incluso ahora más que antes. Retirar ese apoyo, por falta de recursos o como medida de castigo, solo puede empeorar la crisis. Las Naciones Unidas deben estudiar la posibilidad de mantener un fomento de la capacidad firme, incluso fuera del marco de la UNMISS. Además, es necesario poner en marcha mayores mecanismos de fomento de la confianza para la labor de colaboración entre el Gobierno de Sudán del Sur y la UNMISS. Mi Gobierno sigue comprometido a colaborar con todos el personal de

asistencia humanitaria para ayudarnos a aliviar las terribles condiciones de nuestro pueblo. Lo que Sudán del Sur necesita es comprensión, compasión y apoyo para la consolidación de una nación que pueda garantizar la paz, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de toda su población.

Permítaseme concluir con algunas observaciones finales sobre la índole de nuestra búsqueda de la paz. A pesar de que actualmente nuestro país está muy dividido, estimamos que, en última instancia, en nuestra cultura se pueden resolver los conflictos logrando un equilibrio entre la rendición de cuentas y las concesiones, la reconciliación y el perdón mutuos. Fue la búsqueda de esos valores lo que hizo al Presidente Kiir conceder la amnistía a las milicias, en su mayoría nuer, e integrarlos en el ejército, hasta el punto que acabaron siendo la mayoría de las fuerzas armadas. Aunque la mayoría de ellos se ha sumado ahora a la rebelión, el Presidente Kiir sigue instando a esos valores como pilares de nuestro proceso de paz y ha expresado su disposición a adoptar cualquier tipo de medidas que pueda acelerar el camino por delante para poner fin a la guerra.

En ese sentido, quisiera informar de que el Presidente Kiir ha tenido la amabilidad de concederme permiso para reunirme con los cuatro detenidos en Juba y los siete a los que se había liberado y se había puesto bajo la protección del Gobierno de Kenya. Todos ellos se opusieron al uso de la violencia para derrocar al Gobierno, pero apoyaron el diálogo a fin de abordar las preocupaciones de los rebeldes y otros grupos de oposición para poner fin a la guerra y restablecer la paz y la reconciliación nacional. Como el Presidente afirmó, una de las razones por las que se acabó desestimando los cargos contra los cuatro acusados fue el fomento de los esfuerzos en pro de la paz y la reconciliación nacional.

Para concluir, quisiera reiterar una vez más nuestra confianza y nuestro profundo agradecimiento a las Naciones Unidas por su comprensión y su inquebrantable apoyo a nuestro país como nación unida que aspira a estar en paz consigo misma y a promover el desarrollo y la prosperidad para todos sus habitantes.

El Presidente (*habla en inglés*): No hay más nombres en la lista de oradores. El Consejo de Seguridad ha concluido así la presente etapa del examen del tema que figura en el orden del día.

Se levanta la sesión a las 17.15 horas.